



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
13 de noviembre de 2020
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés
únicamente

Comité de los Derechos del Niño

Informe inicial que Sudán del Sur debía presentar en 2017 en virtud del artículo 44 de la Convención*

[Fecha de recepción: 3 de febrero de 2020]

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.



Índice

	<i>Página</i>
Abreviaciones y acrónimos	3
Cuadros	4
Anexos	5
Introducción	6
I. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44, párr. 6)	7
II. Definición de niño (art. 1)	17
III. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)	18
IV. Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8 y 13 a 17)	23
V. Violencia contra el niño (arts. 19; 24, párr. 3; 28, párr. 2; 34; 37 a) y 39).....	26
VI. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5; 9 a 11; 18, párrs. 1 y 2; 20; 21; 25 y 27, párr. 4)	32
VII. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6; 18, párr. 3; 23; 24; 26; 27, párrs. 1 a 3; y 33).....	36
VIII. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)	43
IX. Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) a d), y 38 a 40).....	49

Abreviaciones y acrónimos

ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ELPS	Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán
ELPS-O	Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición
FDPSS	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur
OCHA	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONU-Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
PIB	producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UA	Unión Africana
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNMAS	Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas
UNMISS	Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

Cuadros

1. Asignaciones por sectores en el presupuesto 2017/18, en porcentaje
2. Financiación de los donantes por sector
3. Tendencias de determinados indicadores de resultados sanitarios
4. Causa principal de la mortalidad materna en número y porcentaje, 2014
5. Escalera de educación del Gobierno de la República de Sudán del Sur
6. El género en la educación
7. Número de niños que viven y trabajan en la calle registrados por estado en 2013/14
8. Número total de jóvenes infractores en prisiones y reformatorios de Sudán del Sur en octubre de 2017
9. Número de jóvenes infractores en el reformatorio de Wau en octubre de 2017

Anexos

Constitución de Transición (enmendada) de 2011

Ley de la Infancia de 2008

Plan de Desarrollo de Sudán del Sur (2011)

Ley de Educación de 2012

Plan Estratégico del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social (2013-2018)

Política Nacional de Género (2012)

Política Nacional de Discapacidad e Inclusión (2013)

Política Nacional de Protección Social (2014)

Presupuestación Adaptada a las Necesidades de los Niños en Sudán del Sur: Una Guía para los Encargados de Formular Políticas y las Organizaciones Centradas en los Niños (2014)

Folleto de Estadísticas Nacionales de Educación (2016)

Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la Mujer, la Paz y la Seguridad y las Resoluciones Conexas (2015-2020)

Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario (2017)

Plan Estratégico Nacional del Sector de la Salud (2017-2021)

Cuadros del presupuesto aprobado, Ejercicio económico 2017/18

Proyecto de Plan de Acción sobre el Matrimonio Infantil (2018)

Introducción

1. El Gobierno de la República de Sudán del Sur (en adelante, “el Gobierno”) se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante, “la Convención”) el 23 de enero de 2015. La Convención entró en vigor en Sudán del Sur el 22 de febrero de 2015 y el informe inicial debía presentarse en el plazo de dos años a partir de esa fecha, de conformidad con el artículo 44, párrafo 1, de la Convención. Aunque Sudán del Sur es uno de los países que más recientemente ha ratificado la Convención, antes de su independencia del Sudán el Gobierno autónomo del Sudán Meridional había participado activamente también en la preparación de los informes periódicos tercero y cuarto del Sudán en 2010.

2. Los niños representan más de la mitad de la población del país y hacer efectivos sus derechos reviste un interés especial y prioritario para el Gobierno. La legislación y los marcos de políticas en vigor relacionados con los derechos de los niños en Sudán del Sur han venido marcados en gran medida por la prolongada experiencia de conflictos armados en el país, y queda mucho por hacer para elaborar leyes, marcos de políticas, procedimientos e instituciones nuevos y sólidos que reflejen adecuadamente los compromisos internacionales asumidos en virtud de la Convención. Como primera medida importante, la Ley de la Infancia (Ley núm. 10 de 2008) (en adelante, la “Ley de la Infancia de 2008”) es un logro fundamental para proteger y promover los derechos del niño. Es un instrumento legislativo amplio que incorpora la Convención en la legislación nacional y refunde toda la legislación relativa a los derechos y el bienestar de los niños. Sin embargo, aplicarla plenamente sigue siendo una empresa difícil que llevará tiempo lograr. Otra medida importante adoptada por Sudán del Sur fue la promulgación en 2011 de la Constitución de Transición (enmendada) de la República de Sudán del Sur, en cuyo artículo 1, párrafo 4, se dispone que el país se gobernará sobre la base de un sistema democrático descentralizado y que se fundamenta en la justicia, la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

3. Se ha hecho todo lo posible para que el presente informe inicial dé cuenta equilibradamente al Comité de las realidades de la vida de los niños en Sudán del Sur y las innumerables dificultades a que se enfrentan el Gobierno y la sociedad civil para aplicar la Convención. Es esencial que los progresos realizados en la aplicación de la Convención que se resumen en el informe se consideren en el contexto del panorama humanitario, político y socioeconómico que ha prevalecido desde la adhesión de Sudán del Sur a la Convención en 2015. El Gobierno trata de superar actualmente enormes dificultades que ponen en peligro su capacidad de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de todos los niños que se encuentran bajo su jurisdicción. Se reconoce que para Sudán del Sur es prioritario dar una respuesta urgentemente a la situación de los niños atrapados en el conflicto en curso. Al mismo tiempo, todavía no se ha establecido plenamente la infraestructura institucional que haga realidad la protección y promoción de los derechos de los niños en el país.

4. El presente informe fue compilado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos del Gobierno, dirigido conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales y el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, con aportaciones de las instituciones pertinentes centradas en la infancia. El Comité llevó a cabo un estudio preliminar de la legislación, las políticas, los procedimientos administrativos y las estrategias nacionales en vigor, así como de las decisiones judiciales recientes. Se celebró un taller consultivo en Yuba con los organismos públicos y las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil pertinentes, la Comisión de Derechos Humanos y organismos de las Naciones Unidas, con objeto de validar el informe. Equipos de estudio del Gobierno, integrados por representantes del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, el Ministerio de Educación e Instrucción Generales, el Servicio de Policía, el Servicio Penitenciario, la Dependencia de Justicia Militar y Protección de la Infancia de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (FDPSS), dirigieron consultas en tres regiones: gran Ecuatoria (Torit), gran Alto Nilo (Malakal) y gran Bahr el-Ghazal (Wau). En esas consultas participaron instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios clave.

5. Los días 21 y 22 de agosto de 2019, el Comité de Redacción, encabezado por las instituciones públicas pertinentes, celebró en Yuba un taller de validación al que asistieron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, de organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales.

6. Por consiguiente, el contenido del presente informe refleja las aportaciones de los principales interesados en lo que respecta al modo en que ha cumplido sus obligaciones en virtud de la Convención el país. El proceso de presentación de información se basó en los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, no discriminación y respeto de las opiniones de los demás. Cabe mencionar que para el Comité Interministerial de Redacción en Materia de Derechos Humanos ha sido un reto reunir la información y los indicadores pertinentes para la preparación de este informe inicial, ya que en muchos casos se carece de la información porque no se reúne sistemáticamente.

7. El informe sigue las orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los informes iniciales aprobadas por el Comité en su primer período de sesiones (CRC/C/5) y las directrices generales más actualizadas aprobadas en su 65º período de sesiones (CRC/C/58/REV.3). El informe está compuesto por el documento básico común de las Naciones Unidas, el informe inicial específico sobre la Convención y un anexo con las publicaciones pertinentes.

I. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44, párr. 6)

Reservas y ratificaciones

8. Sudán del Sur se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sin formular ninguna reserva ni declaración.

9. En 2016 Sudán del Sur se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, al Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y al Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Recientemente, la Asamblea Legislativa Nacional de Transición ha votado a favor de que Sudán del Sur se adhiera a la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, aunque el instrumento de adhesión aún no se ha remitido a la Unión Africana (UA).

Medidas adoptadas para armonizar plenamente la legislación y la práctica nacionales con la Convención y los Protocolos Facultativos

10. La Comisión de Examen de la Legislación de Sudán del Sur se estableció en 2012 para que promoviese la uniformidad y la armonización de la legislación con las obligaciones internacionales, y detectara y resolviera los problemas relacionados con el acceso a la justicia y la conducta de la judicatura y los abogados. Esa Comisión no ha realizado todavía un examen exhaustivo de la legislación nacional en lo que respecta a su conformidad con la Convención. No obstante, de resultas del Acuerdo General de Paz de 2005 y la declaración de independencia de 2011, se ha promulgado en el país una cantidad importante de nuevas leyes que institucionalizan los compromisos en materia de derechos humanos y armonizan gradualmente la legislación y la práctica nacionales con las disposiciones de la Convención.

11. El artículo 9, párrafo 3, de la Constitución de Transición (enmendada) dispone lo siguiente: “Todos los derechos y libertades consagrados en los tratados, pactos e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Sudán del Sur o a los que se haya adherido serán parte indisociable de la presente Carta”. La Carta de Derechos es

“defendida, protegida y aplicada por el Tribunal Supremo y otros tribunales competentes” y “no cabrá ninguna derogación de los derechos y libertades consagrados en la Carta”.

12. Los derechos del niño en virtud de la Convención se reflejan además en el capítulo 17 de la Constitución que, entre otras cosas, establece los derechos de los niños a la vida, la supervivencia y el desarrollo y a no sufrir ninguna forma de discriminación. El capítulo 17 dispone además que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, la consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Entre otras disposiciones de la Constitución que se refieren a los derechos de los niños cabe citar:

a) El artículo 16, párrafo 4 c), exige al Gobierno que proporcione atención maternoinfantil y atención médica a las mujeres embarazadas y lactantes;

b) El artículo 29 exige a todos los niveles de la administración pública que garanticen la educación gratuita y obligatoria en la enseñanza primaria y un programa gratuito de erradicación del analfabetismo;

c) El artículo 33 dispone que las comunidades étnicas y culturales tienen derecho a criar a sus hijos de conformidad con sus culturas y costumbres respectivas, con arreglo a la Constitución y la ley;

d) El artículo 38, párrafo 2 b), exige al Gobierno nacional que ponga a disposición los recursos financieros necesarios para que la enseñanza secundaria y superior sean asequibles, con objeto de colmar la brecha educativa causada por el colapso de los servicios educativos durante los años de conflicto;

e) El artículo 39, párrafo 3, establece que los padres tienen el derecho y el deber de cuidar y criar a sus hijos;

f) El artículo 39, párrafo 4, dispone que los niños no serán separados de sus padres o de las personas legalmente autorizadas a cuidarlos contra la voluntad de esos padres o de esas personas, salvo de conformidad con la ley;

g) El artículo 40 dispone que todos los niveles de la administración pública aprobarán políticas y prestarán servicios para el bienestar de los niños y los jóvenes y velarán por su desarrollo moral y físico y su protección contra el abuso y el abandono morales y físicos;

h) En el Anexo B, apartado 19, la enseñanza preescolar, primaria y secundaria se sitúan dentro de las competencias legislativas y ejecutivas exclusivas de los estados.

13. La legislación principal que incorpora la Convención en el derecho interno es la Ley de la Infancia de 2008, que tiene por objeto general profundizar, promover y proteger los derechos de los niños de Sudán del Sur definidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y en otros instrumentos, protocolos, normas y reglas internacionales sobre la protección y el bienestar de los niños de los que es signatario el país. Se reconoce que sigue habiendo dificultades para aplicar la Ley de la Infancia, que aún no se ha difundido ampliamente en los 32 estados y sectores.

14. Además de la Constitución de Transición y la Ley de la Infancia, la legislación siguiente incorpora también en el ordenamiento nacional los principios y normas establecidos en la Convención:

a) Ley de Procedimiento Civil de 2007;

b) Ley del Código de Procedimiento Penal de 2008;

c) Ley del Código Penal de 2008;

d) Ley de la Administración Local de 2009;

e) Ley del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán de 2009;

f) Ley del Servicio de Policía de 2009;

g) Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur de 2009;

- h) Ley de la Comisión del Sudán Meridional de Lucha contra la Corrupción de 2009;
- i) Ley del Servicio Penitenciario de 2011;
- j) Ley de Nacionalidad de 2011;
- k) Ley de la Comisión de Desmovilización, Desarme y Reintegración de 2011;
- l) Ley de la Comisión del Sudán Meridional de Viudas, Huérfanos y Personas con Discapacidad por Causa de la Guerra, de 2011;
- m) Ley de la Cámara de Reclamaciones Públicas de 2011;
- n) Ley de Pasaportes e Inmigración de 2012;
- o) Ley del Convenio de Ginebra de 2012;
- p) Ley de Refugiados de 2012;
- q) Ley de Educación General de 2012;
- r) Ley de la Comisión de Paz y Reconciliación de 2012;
- s) Ley de Acceso a la Información de 2013;
- t) Ley de la Comisión sobre el VIH/Sida de 2013;
- u) Ley de Gestión de los Ingresos del Petróleo de 2013;
- v) Ley de la Comisión de Socorro y Rehabilitación de 2016;
- w) Ley del Trabajo de 2017;
- x) Ley del Registro Civil de 2018.

15. El sistema de gobierno de Sudán del Sur está estructurado para promover los principios democráticos y el pluralismo político mediante la descentralización y la transferencia de facultades de decisión a la población por conducto de los niveles apropiados de la administración pública en los que mejor puede gestionar y dirigir sus asuntos, lo cual es especialmente importante en un país como Sudán del Sur, que tiene un carácter multiétnico. El artículo 122 de la Ley de la Administración Local prevé un sistema descentralizado de gobernanza en el que se establecen instituciones en tres niveles: el Gobierno nacional, el estado y los consejos de la administración local. El nivel administrativo inferior son los boma, seguidos por los distritos, los condados y los estados. En el plano de los estados, los gobiernos correspondientes tienen poderes legislativos y ejecutivos para promulgar y aplicar reglamentos, entre otros los que guardan relación con los derechos del niño. Actualmente hay 32 estados en Sudán del Sur. En el plano local hay consejos urbanos, compuestos por consejos de ciudad, municipales y de pueblo, y consejos rurales, compuestos por consejos de condado, de distrito y de boma.

16. También es importante señalar que Sudán del Sur utiliza un ordenamiento jurídico plural en el que coexisten el derecho consuetudinario y el derecho positivo. Con arreglo al artículo 5 c) de la Constitución de Transición (enmendada), se reconocen las “costumbres y tradiciones de la población” como una de las fuentes del derecho en el país y se reconoce asimismo la aplicación del derecho consuetudinario en los tribunales, con sujeción a la Constitución y a la ley. La Ley de la Infancia de 2008 confirma que deben aplicarse el derecho consuetudinario y el derecho tradicional cuando protegen los derechos del niño, pero no cuando son contrarios al interés superior del niño (artículo 4, párrafo 4). La Ley de la Administración Local de 2009 también indica explícitamente que en todas las medidas concernientes a los niños, la consideración primordial será el interés superior del niño (artículo 111, párrafo 3).

17. Las causas civiles se tramitan con arreglo al derecho consuetudinario y las causas penales se rigen por las disposiciones del derecho positivo, salvo las causas penales con una conexión consuetudinaria que remita al tribunal de derecho consuetudinario un tribunal competente de derecho positivo (Ley de la Administración Local de 2009, artículo 98, párrafo 2). Los tribunales de derecho positivo entienden en segunda instancia de las decisiones de los tribunales consuetudinarios. Los tribunales consuetudinarios, presididos por

jefes o paneles de jefes, están establecidos en los siguientes niveles de la administración local: condado, distrito y boma. Al fallar los casos, se espera que los tribunales consuetudinarios dicten sentencias de conformidad con las costumbres, tradiciones, normas y ética de las comunidades (Ley de la Administración Local de 2009, artículo 98, párrafo 1). Las audiencias se suelen celebrar bajo árboles y están abiertas al público.

18. Los tribunales consuetudinarios pueden posibilitar que la población acceda a la justicia de manera eficaz, ya que son capaces de tramitar las causas con relativa rapidez y a bajo costo. A menudo son geográficamente accesibles para las poblaciones rurales. Sin embargo, presentan algunas desventajas para las mujeres y las niñas, como la de obligar a hijas a casarse con hombres seleccionados por sus familias. Además, la aplicación discriminatoria del derecho consuetudinario puede disuadir a las mujeres y las niñas de denunciar incidentes de violencia sexual y de género.

19. Para tratar de resolver algunos de esos problemas, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, junto con el poder judicial y organismos de las Naciones Unidas, construyó un centro de derecho consuetudinario en Rumbek en 2010 y elaboró un manual de capacitación sobre los principios del derecho y los procedimientos judiciales. Más recientemente, entre otras medidas adoptadas para aumentar la comprensión del marco regulatorio de los estados y el estado de derecho en relación con los niños, se impartió capacitación a dirigentes tradicionales (con el apoyo de la División de Derechos Humanos de la UNMISS) encaminada a promover los criterios de los tribunales consuetudinarios en relación con los derechos de las mujeres y los niños.

Adopción de una estrategia nacional amplia para la infancia y el plan o los planes de acción correspondientes

20. El Gobierno no ha adoptado todavía un plan de acción nacional único y específico para la infancia que trate de todos los derechos del niño consagrados en la Convención. Sin embargo, hay una amplia gama de planes de acción nacionales complementarios que tratan de los derechos del niño. El más importante es el Plan de Desarrollo de Sudán del Sur, que se publicó en 2011. En él se definieron los objetivos de desarrollo fundamentales para el nuevo país (Sudán del Sur) y se resumieron los programas prioritarios para alcanzar esos objetivos. Aunque estaba previsto que durara de 2011 a 2013, se está actualizando y también se está prorrogando su utilización. Se está preparando el Plan Estratégico Nacional ajustado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el período de 2018 a 2020:

- a) Gobernanza (incluida la creación de mecanismos de gobernanza inclusivos y que rinden cuentas);
- b) Desarrollo económico (incluido el desarrollo de infraestructura en gran escala y de base comunitaria);
- c) Desarrollo social y humano (incluidas la mejora y la ampliación de los servicios de educación y salud);
- d) Prevención de conflictos y seguridad (incluida una disposición especial para la reintegración de los niños soldados y un mayor acceso a la justicia);
- e) En el Plan de Desarrollo también se indican siete cuestiones intersectoriales de gran importancia para los derechos del niño: la creación de capacidad, la corrupción, el medio ambiente, la igualdad de género, el VIH y el sida, los derechos humanos y el empleo de los jóvenes.

21. El Gobierno también ha elaborado un Plan Estratégico (2013/18) que incluye una estrategia destinada a ayudar a los niños vulnerables mediante la prestación de protección social y un plan de subsidio de manutención infantil para todas las familias con hijos menores de 5 años que facilite el cuidado de los hijos por parte de las familias. En esos Planes también se proponía un programa de alimentación escolar en las escuelas primarias, la alimentación suplementaria general de las embarazadas y las madres lactantes y la alimentación suplementaria específica de los niños malnutridos menores de 5 años. El subsidio del Gobierno para familias de acogida presta apoyo financiero a todas las familias que se ocupan

de niños huérfanos. La Dirección de Bienestar Infantil del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social también ha elaborado un plan estratégico para complementar el plan estratégico del Gobierno sobre el bienestar infantil, como componente central del mismo.

22. Además del Plan de Desarrollo de Sudán del Sur y del Plan Estratégico del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social (2013/18), el país ha elaborado estrategias y planes sectoriales específicos centrados explícitamente en los derechos de los niños, entre otros los siguientes:

- a) Plan del Sector de la Educación (2012/17);
- b) Política Nacional de Género (2012);
- c) Marco Estratégico sobre la Justicia para los Niños: Cómo Puede Prestar Mejores Servicios y Protección a los Niños el Sistema de Justicia para los Niños (2012);
- d) Plan de Acción del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (ELPS) para Poner Fin al Reclutamiento y la Utilización de Niños como Soldados (2009; en 2012 y 2014 se formularon nuevos compromisos sobre este plan);
- e) Política Nacional de Discapacidad e Inclusión (2013);
- f) Plan Estratégico Nacional sobre el VIH y el Sida (2013-2017);
- g) Política de Sistemas de Educación Alternativa (2013/17);
- h) Procedimientos Operativos Estándar para la Prevención, la Protección y la Respuesta ante la Violencia de Género en Sudán del Sur (2014);
- i) Estrategia para la Educación de las Niñas en Sudán del Sur (2015/17);
- j) Documento de Estrategia para los Sistemas de Salud Comunitarios: Iniciativa de Salud en los Boma (2015);
- k) Marco Nacional de Políticas de Protección Social (2015);
- l) Política Nacional sobre Protección y Cuidado de los Niños sin Atención Parental Adecuada (en espera de la aprobación del Consejo de Ministros);
- m) Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2015-2020);
- n) Política Nacional de Salud (2016-2026), aplicada por conducto de dos planes estratégicos quinquenales: 2017-2021 y 2021-2026.

Organismo de coordinación para la aplicación de la Convención

23. A raíz de la independencia se estableció el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social con el mandato de promover la igualdad de género y la justicia social y de salvaguardar los derechos y el bienestar de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Desempeña las funciones básicas siguientes:

- a) Elabora políticas y programas para la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, la protección del niño, así como la protección social y el bienestar social de otros grupos vulnerables;
- b) Incorpora la igualdad de género y la discapacidad en el proceso de desarrollo nacional;
- c) Vela por el bienestar de las personas con discapacidad, los niños, las mujeres y otros grupos vulnerables y la promoción y el respeto de sus derechos;
- d) Gestiona programas e instituciones para el bienestar social y de los niños;
- e) Mejora el entorno de trabajo mediante el fortalecimiento de las estructuras, los sistemas y los procedimientos y la capacidad humana y administrativa para la prestación eficiente de servicios;

f) Refuerza el seguimiento y la evaluación, la investigación, la documentación, la planificación y la presupuestación.

24. Se divide en diferentes Direcciones: Género, Bienestar Social, Bienestar Infantil, Administración y Finanzas y Planificación, Formación, Investigación y Documentación.

25. La Dirección de Bienestar Infantil del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social es la encargada explícitamente de aplicar la Convención. Se responsabiliza de formular políticas y elaborar programas que promuevan los derechos del niño y vela por la protección de los niños contra la violencia, la explotación, el descuido y el maltrato. Entre otros, tiene como objetivos específicos:

a) Prestar apoyo en la elaboración y aplicación de normas, políticas, directrices y legislación para el bienestar y la protección del niño;

b) Velar por que se promuevan y protejan los derechos del niño;

c) Elaborar un sistema de protección del niño y de justicia para los niños;

d) Velar por la protección de los niños afectados por la violencia, la explotación, el descuido y el maltrato;

e) Promover la capacidad de los trabajadores y consejeros sociales.

26. El Ministerio Nacional de Género, Infancia y Bienestar Social, en colaboración con otros organismos de la administración pública pertinentes, incluidos los de los estados, tiene el mandato de coordinar la aplicación de la Convención. Esta coordinación oficial y oficiosa se realiza en el plano nacional mediante la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas, y coordinando la incorporación de la perspectiva de género y la discapacidad en las distintas administraciones y entre ellas. En el plano de los estados, los Ministerios de Género y Desarrollo Social garantizan la aplicación de las políticas, directrices, programas y proyectos. El Gobierno se enfrenta a dificultades para lograr una coordinación eficaz y es necesaria una mayor sistematización, especialmente entre el plano nacional y el de los estados.

Asignaciones presupuestarias para la aplicación de la Convención

27. La asignación de recursos es un componente decisivo para promover la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños, especialmente en un país en el que muchas familias suelen ser grandes y extensas y carecen de la capacidad de financiar y satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.

28. En la documentación presupuestaria actual no se distinguen explícitamente asignaciones presupuestarias para poner en práctica los derechos del niño que figuran en la Convención. Se destinan asignaciones presupuestarias a diferentes sectores de la administración pública responsables de asuntos relacionados con la infancia, como la educación, la salud, las cuestiones sociales y humanitarias, la paz y las cuestiones sociales y económicas. Cabe señalar que el sector social y humanitario comprende organismos públicos clave con mandatos relacionados con los niños y las mujeres, entre ellos los ministerios siguientes: Género, Infancia y Bienestar Social; Cultura, Juventud y Deportes; Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres; la Comisión de Socorro y Rehabilitación de Sudán del Sur; la Comisión de Paz y la Comisión de Viudas, Huérfanos y Personas con Discapacidad por Causa de la Guerra. Además, el sector de la paz abarca las actividades humanitarias, la reparación de la infraestructura y el apoyo al transporte, la alimentación y el retorno de las poblaciones desplazadas. El sector económico incluye ministerios clave con mandatos relacionados con los niños, entre ellos el Ministerio de Energía y Presas, la Corporación de Aguas Urbanas de Sudán del Sur y el Ministerio de Recursos Hídricos y Riego.

29. El 28 de agosto de 2017, el parlamento nacional aprobó su presupuesto para el ejercicio económico 2017/18. El nuevo presupuesto incluye asignaciones para los sectores de la salud, la educación, la economía, la paz y los sectores social y humanitario, así como para las transferencias a los estados. Además, el presupuesto incluye fondos para las reformas

relacionadas con la sostenibilidad fiscal y la mejora del sistema de gestión de las finanzas públicas.

30. El presupuesto total para el ejercicio económico 2017/18 asciende a casi 39.800 millones de libras sursudanesas (39.752.679.995 libras sursudanesas), repartidos en cinco partidas presupuestarias: sueldos y salarios, bienes y servicios, capital, transferencias y otros. El 54 % del presupuesto (21.629 millones de libras sursudanesas) se destina a salarios, incluidos el ejército y otras fuerzas organizadas. La parte restante del presupuesto, que es el 46 %, se utiliza para bienes y servicios, capital y transferencias al exterior, a los estados y a los condados. Las transferencias a los estados y los condados cubren los gastos de funcionamiento y las iniciativas de desarrollo de los condados, y los salarios del personal docente y los trabajadores sanitarios, junto con los gastos de las fuerzas organizadas en los estados. El presupuesto también incluye una asignación de 3.000 millones de libras sursudanesas para la aplicación del acuerdo de paz.

31. En los últimos años, las asignaciones presupuestarias del Gobierno para las instituciones y programas centrados en la infancia no han sido suficientes para responder a las prioridades nacionales y locales de protección y promoción de los derechos del niño. En el cuadro 1 se muestran las asignaciones a los sectores de la salud, la educación y el sector social y humanitario. Debido al conflicto armado actual en el país, las asignaciones presupuestarias disminuyeron entre 2015 y 2017/18. Como consecuencia de la escasez de recursos y las muchas necesidades que compiten por el erario público, el Gobierno tiene enormes dificultades para disponer de los recursos financieros adecuados que le permitan hacer efectivos los derechos del niño. La otra razón es que la economía de Sudán del Sur sufrió múltiples problemas, entre ellos una caída de la producción de petróleo, la maduración de los yacimientos petrolíferos, la disminución continua y pronunciada de los precios del petróleo y una disrupción notable del comercio debido a la inseguridad. La inflación ha aumentado rápidamente debido al endeudamiento con los bancos nacionales, pero se han hecho progresos y la inflación anual ha disminuido de un máximo del 549 % en septiembre de 2016 al 102 % en septiembre de 2017, de conformidad con el índice de precios al consumidor de Sudán del Sur publicado por la Oficina Nacional de Estadística en noviembre de 2017.

Cuadro 1
Asignaciones por sectores en el presupuesto 2017/18
(En porcentaje)

Sectores	Ejercicios económicos		
	2015/6	2016/7	2017/8
Rendición de cuentas	2,6	4,0	0,7
Intersectorial	1,0	17,9	0,0
Económico	2,3	1,5	0,6
Educación	6,6	4,2	2,1
Salud	3,1	2,0	2,6
Infraestructura	1,8	1,9	0,8
Recursos naturales	3,5	2,2	2,0
Administración pública	8,6	15,9	33,4
Estado de derecho	15,3	11,3	9,9
Seguridad	44,5	32,8	31,8
Social y Humanitario	0,9	0,5	0,4
Subvenciones en bloque	9,8	5,8	6,5
Paz	0	0	7,5
Atrasos, imprevistos	0	0	1,8

Fuente: Cuadros del presupuesto aprobado, Ministerio de Finanzas y Planificación, Presupuesto 2017/18 y de los dos años anteriores.

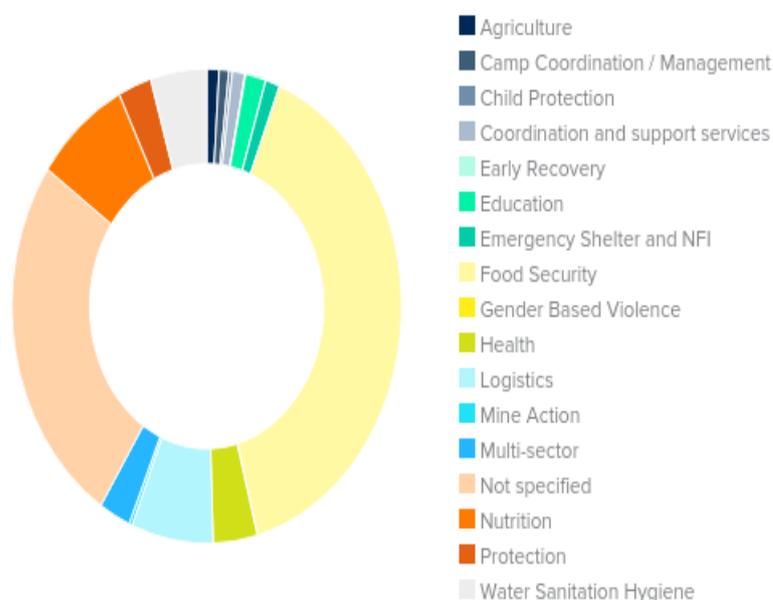
32. El Gobierno ha adoptado medidas para que el presupuesto responda mejor a las necesidades de los niños y, en 2013, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, junto con el Ministerio de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres, en colaboración con Save the Children International, elaboró un manual sobre la presupuestación adaptada a las necesidades de los niños e impartió capacitación al respecto a interesados de la sociedad civil y la administración pública.

Asistencia internacional y ayuda para el desarrollo

33. Cuando se produjo la independencia, el Gobierno estableció una Dependencia de Coordinación y Gestión de la Ayuda dentro del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica para que evaluara, supervisara y aprobara todos los proyectos financiados por donantes en el país. Ha resultado difícil calcular el componente de derechos del niño de cada programa financiado por los donantes. El Gobierno y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reunieron el total de la financiación de los donantes comunicada y comprobaron que en 2017 se habían proporcionado en total 1.480 millones de dólares de los Estados Unidos, que se habían asignado a los sectores que figuran en el cuadro siguiente.

Cuadro 2

Financiación de los donantes por sector



Fuente: OCHA, Servicio de Seguimiento Financiero, Sudán del Sur, 2017.

Establecimiento de una institución nacional de derechos humanos

34. El Gobierno está proporcionando la financiación necesaria a la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur de conformidad con el capítulo IV de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011. Las responsabilidades de la Comisión son las siguientes:

- a) Investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos;
- b) Visitar las cárceles de la policía, las prisiones y las instalaciones conexas con miras a inspeccionar y evaluar las condiciones de los reclusos y formular recomendaciones;
- c) Realizar investigaciones, impartir educación y facilitar información;
- d) Formular recomendaciones a la Asamblea Legislativa Nacional;

- e) Concienciar sobre los derechos humanos; y
- f) Hacer un seguimiento del modo en que cumplen los tratados regionales e internacionales de derechos humanos ratificados todos los niveles de la administración pública.

35. Aunque no presta una atención específica a los derechos del niño, la Comisión ha redactado sin embargo informes generales sobre la situación de los derechos humanos en el país que han incluido diferentes aspectos de los derechos del niño, en particular en relación con la vigilancia de los centros de detención. Además, debería crearse una Oficina del Niño dentro de la Comisión.

36. El Presidente, el Vicepresidente y los miembros de la Comisión son nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Nacional. Los miembros deben ser personas de probada integridad y competencia, no partidistas e imparciales. La Comisión, con el apoyo de la UNMISS y otros asociados, ha hecho todo lo posible para asegurarse de cumplir los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). En octubre de 2018 fue acreditada por la Comisión de Derechos Humanos de la UA en Gambia.

37. En la Ley de la Infancia de 2008 se prevé el establecimiento de un Comisionado Independiente para la Infancia. Si bien se trata de una medida importante para la promoción y protección de los derechos del niño, en el actual clima de recursos técnicos y financieros limitados, el modo de proceder que se ha acordado es reforzar la implicación de la Comisión de Derechos Humanos en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los niños.

Reunión de datos

38. Poder reunir datos exactos y exhaustivos sobre el estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño mediante una vigilancia de las violaciones de los derechos del niño sigue siendo difícil en el país. Dos fuentes vitales de información son el Censo de Población y Vivienda que se realizó en 2008 y la Encuesta de Hogares de Sudán del Sur que fue elaborada por el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Estadística en 2010. Debido a la situación de la seguridad, los planes para una nueva encuesta de hogares a nivel nacional se han dejado en suspenso. Sin embargo, se han hecho algunos progresos en la reunión de datos en sectores específicos como resultado de la creación del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación y el Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria.

39. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social cuenta con una Dirección de Planificación, Investigación y Documentación que tiene la responsabilidad concreta de iniciar y llevar a cabo estudios e investigaciones para la promoción del desarrollo social y el análisis de la situación de los niños, las mujeres y las personas con discapacidad, y de establecer datos de referencia sobre las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Entre las encuestas y estudios realizados recientemente por ese Ministerio en los que se reunieron datos relacionados con los niños cabe citar los siguientes:

- a) Encuesta de Base sobre la Prevalencia de la Violencia de Género (2010);
- b) Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en materia de Matrimonio Infantil en el Sudán Meridional (2010);
- c) Evaluación Integral de Género del País (2012);
- d) Evaluación Nacional de la Discapacidad (2012);
- e) Inventario y Evaluación de los Sistemas de Protección del Niño en Diferentes Estados; a saber, Lagos, Yonglei, Warrap y Bahr el-Ghazal Septentrional (2013);
- f) Una evaluación de los niños que viven y trabajan en las calles en seis estados (2013/14);
- g) Estudio de Referencia sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (2013);

h) Hoja de Ruta para la Creación de un Teléfono de Asistencia a los Niños en la República de Sudán del Sur (2015).

Los estudios mencionados han proporcionado al Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social información y datos provechosos para formular estrategias, políticas y planes de trabajo.

Medidas adoptadas para dar a conocer ampliamente la Convención

40. Se ha avanzado bastante en dar a conocer ampliamente la Convención y los derechos del niño por conducto de la educación pública. Por ejemplo, el Gobierno, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, imprimió una versión adaptada a los niños de la Ley de la Infancia de 2008. También se ha difundido información sobre los derechos del niño, el matrimonio infantil y la violencia contra los niños por conducto de diferentes medios de comunicación, como la televisión, la radio, los oradores públicos y los medios impresos. Los niños celebran todos los años el Día del Niño Africano con actos como obras de teatro y programas de debate en la radio, lo que brinda la oportunidad de reflexionar sobre la situación de los niños y los progresos realizados en su desarrollo, protección y participación. Aunque persiste el problema de la falta de disponibilidad de datos estadísticos sobre la capacitación de profesionales clave con respecto a la Convención, el Gobierno ha hecho todo lo posible por capacitar a profesionales con criterio *ad hoc*. Es necesario también dar amplia difusión a la Convención, especialmente entre las comunidades de lugares remotos.

41. Ha sido un reto para el Gobierno porque la aceptación de las disposiciones de la Convención ha sido lenta en el país debido a que la mayoría de la población carece de los conocimientos necesarios sobre los derechos y las necesidades de protección de los niños. La intención del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social ha sido reflejar la Convención en el contexto local. Es necesario realizar actividades continuas de sensibilización y promoción para lograr una mayor comprensión y conocimiento de las disposiciones de la Convención mediante la impresión y la distribución de ejemplares.

Cooperación con las organizaciones de la sociedad civil

42. El Gobierno alienta la participación de la sociedad civil en la aplicación de la Convención; como resultado de esa participación, se consultó a varias organizaciones en la preparación del presente informe. Hay más de 200 organizaciones de la sociedad civil en el país, que se reúnen libremente de manera regular. Muchas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil colaboran estrechamente con el Gobierno para prestar un apoyo inestimable en la aplicación de la Convención, como Save the Children y Plan International. Entre los ejemplos de asociación fructífera con la sociedad civil cabe mencionar la ejecución de un programa de alimentación escolar que cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, y la colaboración con Save the Children International en materia de justicia para los niños y de presupuestación para los niños que tiene en cuenta sus necesidades.

Efectos de las actividades comerciales sobre los derechos del niño

43. La producción de petróleo contribuye de manera fundamental a la economía del país, ya que aporta algo más de la mitad del producto interno bruto (PIB), el 95 % de las exportaciones, el 90 % de los ingresos públicos y una parte importante del empleo en el sector privado. Los efectos de las actividades y operaciones del sector petrolero sobre los derechos del niño todavía no se han determinado ni evaluado. No obstante, la Constitución de Transición (enmendada) de 2011 cuenta con disposiciones que establecen principios rectores para gestionar el gas y el petróleo en interés de las generaciones futuras y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas. El Gobierno

sigue teniendo dificultades para poner plenamente en práctica los fondos fiduciarios previstos para las generaciones futuras de conformidad con las disposiciones de la Ley de Gestión de los Ingresos del Petróleo de 2013.

44. Se calcula que el sector privado no petrolero, que comprende principalmente la agricultura, la ganadería, la silvicultura y los servicios, representa una pequeña parte del PIB: alrededor del 15 %. La inmensa mayoría de las empresas, muchas de las cuales son pequeñas y medianas empresas, opera en el sector informal. A fin de proteger los derechos del niño en las actividades y operaciones de esas empresas, el Gobierno ha adoptado medidas para garantizar que los niños no trabajen cuando sean menores de 14 años y no estén expuestos a las peores formas de trabajo infantil. En cumplimiento de ello, en 2012 el Gobierno firmó dos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182). También ha establecido una Dependencia de Trabajo Infantil dentro del Ministerio de Trabajo, Función Pública y Desarrollo de Recursos Humanos para que investigue los casos de trabajo infantil. Además, el Gobierno ha establecido la Comisión de Sudán del Sur de Lucha contra la Corrupción y en enero de 2015 firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

II. Definición de niño (art. 1)

45. En 2008, antes de su independencia, Sudán del Sur llevó a cabo un censo de vivienda y población. Estaba previsto realizar un nuevo censo en 2013, pero lamentablemente, debido a la inseguridad, tuvo que ser pospuesto. Todos los datos de población desde 2008 se han basado en previsiones calculadas por la Oficina Nacional de Estadística, que preveía que en 2017 la población sería de 11.868.209 habitantes. Más de la mitad (51 %) de la población es menor de 18 años; el 72 % de la población es menor de 30 años; el 83 % de la población es rural; el 48,7 % de la población son mujeres y el 51,3 %, hombres.

46. El artículo 17, párrafo 4, de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011 establece que un niño es toda persona menor de 18 años. Esta es también la definición que figura en el artículo 5 de la Ley de la Infancia de 2008 y en el artículo 111, párrafo 1, de la Ley de la Administración Local de 2009. Sin embargo, en algunas comunidades del país, el final de la infancia suele estar determinado culturalmente por la entrada en la pubertad, con arreglo a las costumbres y tradiciones de esas comunidades, lo cual puede tener graves consecuencias para la protección de los derechos del niño, en particular en relación con el matrimonio infantil, y sigue siendo un gran reto para el Gobierno.

47. El artículo 23, párrafo 1, de la Ley de la Infancia de 2008 establece que todo niño tiene derecho a ser protegido contra el matrimonio infantil. En virtud del artículo 247, párrafo 2, del Código Penal de Sudán del Sur de 2008, la edad mínima del consentimiento sexual para hombres y mujeres es de 18 años. Según la Encuesta de Hogares de Sudán del Sur, elaborada en 2010 por el Ministerio de Salud y la Oficina Nacional de Estadística, el 7,3 % de las muchachas se casan antes de los 15 años y el 45,2 %, antes de los 18 años. En cuanto a las mujeres de 15 a 49 años casadas antes de los 15 años, se observan diferencias entre los estados: los porcentajes más altos se dan en Ecuatoria Occidental (13 %) y Bahr el-Ghazal Occidental (12 %), mientras que los más bajos se dan en Lagos (4 %), el Alto Nilo (5 %) y Bahr el-Ghazal Septentrional (5 %). No se observaron variaciones significativas en función de la residencia, los grupos de edad, los niveles de educación y los quintiles del índice de riqueza. Con respecto a las mujeres de 20 a 49 años casadas antes de los 18 años, se observan diferencias entre los estados; el porcentaje más alto se da en Unidad (67 %) y los más bajos, en Warrap, Bahr el-Ghazal Septentrional, Lagos y Ecuatoria Central.

48. La legislación de Sudán del Sur incluye varias otras disposiciones relacionadas con la definición de niño, en función de los derechos que deben protegerse en virtud de leyes concretas:

a) Un niño menor de 12 años no puede ser considerado responsable penalmente (Código Penal, artículo 30). Se presume que un niño de 12 a 14 años de edad puede ser considerado responsable penalmente a menos que pueda demostrarse más allá de toda duda razonable que carecía de la capacidad de concebir la intención necesaria para cometer el

delito o, cuando la negligencia sea un elemento del delito, que carecía de la capacidad de comportarse de la manera en que se habría comportado en las circunstancias un adulto razonable (Código Penal, artículo 31);

b) Un niño menor de 16 años no puede ser encarcelado (Ley de la Infancia, artículo 182). No se puede imponer la pena de muerte a un niño (Constitución de Transición, artículo 21, párrafo 2) y esto se reitera en la Ley de la Infancia, en la que se dispone que ningún niño será condenado a la pena capital ni a la reclusión a perpetuidad (artículo 21 a));

c) En virtud de la Ley de la Infancia, un niño solo puede interponer una demanda ante un tribunal por conducto de sus padres, familiares o tutores. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Civil y la Ley de Procedimiento Penal, debe interponer las demandas el tutor del niño. Sin embargo, todo niño tiene derecho a ser oído en cualquier procedimiento en el que se examine un asunto que le concierna (Ley de la Infancia, artículo 7);

d) La edad para votar es de 18 años (Ley de Elecciones Nacionales de 2012, artículo 33);

e) La Constitución de Transición (enmendada) de 2011 especifica que todo niño tiene derecho a no ser obligado a servir en el ejército (artículo 17). El artículo 31, párrafo 1, de la Ley de la Infancia de 2008 establece que la edad mínima para el alistamiento obligatorio o el reclutamiento voluntario en las fuerzas o grupos armados será de 18 años. Esa Ley también establece explícitamente penas por el reclutamiento o la utilización de un niño en una fuerza armada: prisión por un período no superior a diez años o multa o ambas (artículo 32). Esa edad mínima se refuerza en la Ley del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán de 2009 (artículo 22);

f) La edad mínima para el trabajo ligero de los niños es de 12 años, para el empleo remunerado, de 14 años (Ley de la Infancia, artículo 25, párrafo 3) y para el trabajo peligroso, de 18 años (Ley de la Infancia, artículos 5; 22, párrafo 3, y 25, párrafo 1);

g) El artículo 24 iii) de la Ley de Educación General de 2012 establece la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos del país; la educación primaria comienza a los 6 años y finaliza a los 13 años.

III. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)

No discriminación

49. La garantía constitucional de la no discriminación está consagrada en el artículo 14 de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011, que dispone lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, sexo, idioma, credo religioso, opinión política, nacimiento, localización o condición social”. El artículo 17, párrafo 1 e), de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011 dispone además que todo niño tiene derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; al nombre y a la nacionalidad; a conocer a sus padres o a su tutor y a ser cuidado por ellos; a no ser sometido a prácticas de explotación o maltrato, ni a ser obligado a servir en el ejército, ni se le permitirá realizar trabajos que puedan ser peligrosos o perjudiciales para su educación, salud o bienestar; a no sufrir ninguna forma de discriminación; a no sufrir castigos corporales, tratos crueles o inhumanos, a manos, entre otros, de sus padres, la administración escolar u otras instituciones; a no ser sometido a prácticas culturales negativas y perjudiciales que afecten a su salud, bienestar o dignidad; y a ser protegido contra los secuestros y la trata.

50. El artículo 29, párrafo 1, de la Constitución dispone que la educación es un derecho de todo ciudadano y todos los niveles de la administración pública proporcionarán acceso a la educación sin discriminación por motivos de religión, raza y origen étnico, estado de salud, incluido el estado serológico respecto del VIH/sida, género o discapacidad.

51. Muchas otras leyes, políticas y planes estratégicos del Gobierno tratan de luchar contra la marginación y de lograr la igualdad de oportunidades para todos los niños del país. El artículo 9, párrafo 1, de la Ley de la Infancia de 2008 dispone que no se discriminará a un

niño por razón del género, raza, edad, religión, idioma, opinión, estado de salud, nacimiento, costumbres, origen étnico, origen rural o urbano, situación socioeconómica o política, condición de refugiado, antecedentes penales o cualquier otra condición de sus padres o tutores. Asimismo, el artículo 2 a) de la Ley establece que toda persona que discrimine a un niño o a sus padres o tutores en contravención del artículo comete un delito y, una vez declarado culpable, será condenado a una pena de prisión no superior a un año o a una multa o a ambas. Además, el artículo 36, párrafo 2 a), de la Ley de la Infancia dispone que es responsabilidad de la administración pública proteger a los niños contra toda forma de discriminación y adoptar medidas positivas para promover sus derechos. El artículo 39 de la Ley de la Infancia de 2008 establece que los padres tienen deberes y responsabilidades, ya sea impuestos por la ley o por las costumbres, respecto de cada uno de sus hijos sin discriminación, lo que incluye la responsabilidad de inscribir a sus hijos al nacer; protegerlos contra el descuido, la discriminación, la violencia, el maltrato, la explotación, la exposición a riesgos físicos y morales y la opresión; proporcionarles orientación, cuidado, asistencia y mantenimiento adecuados para asegurarles la supervivencia y el desarrollo; velar por que reciban una educación a tiempo completo adecuada a su edad, capacidad y aptitudes; satisfacer cualquier necesidad de educación especial que puedan tener mediante la asistencia regular a la escuela; y velar por que durante cualquier ausencia, una persona competente les proporcione modalidades alternativas de cuidado.

52. El derecho a la no discriminación se refuerza en el contexto de la salud en el artículo 15, párrafo 3, de la Ley de la Infancia, que establece que todo niño tiene derecho a la atención sanitaria básica gratuita y prestársela será responsabilidad de los padres y de la administración pública, y que todo niño tiene derecho a la inmunización gratuita. Además, el artículo dispone que ningún niño que solicite tratamiento o atención médica será objeto de discriminación. Asimismo, el artículo 15, párrafo 4, de la Ley de la Infancia establece que ninguna persona podrá privar a un niño de tratamiento médico por motivo de creencias religiosas o de otra índole.

53. Los derechos de los niños refugiados y desplazados internos reciben una atención especial en el artículo 29, en el que se establece que los niños refugiados y desplazados tienen derecho a la protección de sus derechos y que el Gobierno velará por que tengan acceso a asistencia para la prestación de servicios básicos y la localización de sus padres de manera compatible con su dignidad y sin discriminación. Cuando no se pueda encontrar a los padres, al tutor o a parientes cercanos, todo niño refugiado y desplazado recibirá el mismo cuidado y protección que cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su entorno familiar por cualquier motivo.

54. El derecho de la niña a no ser discriminada se trata en el artículo 26, párrafo 2, de la Ley de la Infancia, que establece que toda niña tiene:

- a) El derecho a participar en pie de igualdad y sin discriminación como compañera de los niños varones en las actividades sociales, económicas y políticas;
- b) Los mismos derechos a la sucesión y la herencia de bienes y una proporción razonable del patrimonio del progenitor fallecido, sin discriminación; y
- c) El derecho a desarrollar su pleno potencial y todas sus capacidades mediante la igualdad de acceso a la educación y la formación. Estas disposiciones aclaran que la niña tiene derecho a ser protegida frente a los abusos y la explotación sexuales y la violencia de género, incluidos la violación, el incesto, el matrimonio precoz y forzado, la clitoridectomía y la mutilación genital femenina. Ninguna niña será expulsada de la escuela por estar embarazada.

55. A pesar de las disposiciones jurídicas, el Gobierno se enfrenta a diversos problemas, especialmente la discriminación debida a las actitudes patriarcales omnipresentes y profundamente arraigadas. Algunas de las manifestaciones de la discriminación de género son: la práctica generalizada del matrimonio infantil; las altas tasas de mortalidad materna; las bajas tasas de alfabetización de las niñas y las mujeres; las tasas más bajas de matriculación en la escuela primaria y secundaria para las niñas que para los niños varones; la falta de participación de las niñas en la adopción de decisiones en la familia y la comunidad y la prevalencia generalizada de la violencia doméstica, el secuestro de niños durante los

robos de ganado, la violación, la agresión sexual y la práctica de entregar a una niña a una familia en compensación por un delito cometido por su familia, en algunas comunidades.

56. El Gobierno ha definido las características de la discriminación contra las niñas y ha tratado de remediarla mediante la ejecución de muchas estrategias y políticas diferentes. En 2012, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social elaboró una Política Nacional de Género y una estrategia para su aplicación. Esa Política prevé un amplio marco institucional y directrices para la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas de los sectores público y privado del país, mediante una colaboración estrecha con organismos de las Naciones Unidas, ONG internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la UA. En 2014, el Gobierno elaboró procedimientos operativos estándar para la prevención, la protección y la respuesta frente a la violencia de género. Las estrategias adoptadas por el Gobierno para combatir la discriminación contra las niñas han recalcado los resultados mínimos deseados, pero siguen siendo necesarias una atención y una vigilancia adicionales.

57. Con respecto a la discriminación por motivos de género en la educación, en 2013, el Gobierno, en colaboración con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, puso en marcha una serie de medidas de acción afirmativa para promover el acceso de las niñas a la educación, entre otras la ejecución del Programa de Educación de las Niñas en Sudán del Sur. Ese Programa tenía por objeto haber ayudado a 200.000 niñas a permanecer en la escuela para cuando finalizase en 2018, mediante la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas, el suministro de transferencias de efectivo, las subvenciones de capitación a las escuelas y la comunicación para el cambio de comportamientos. Las cifras del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación de 2012 a 2016 revelan un incremento lento pero constante de la proporción de niños que estudian en la enseñanza primaria y secundaria. Sin embargo, cabe señalar que las cifras correspondientes a 2015 y 2016 no recogían información de todo el país.

58. El hecho de que los niños con discapacidad carezcan de acceso a los servicios básicos y que las actitudes negativas hacia ellos obstaculicen su participación en la vida social, política y económica sigue siendo un gran reto para el Gobierno. En respuesta a ese reto, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social elaboró una Política Nacional de Discapacidad e Inclusión en 2013. Su objetivo general es ocuparse de las múltiples vulnerabilidades a las que se enfrentan los adultos y los niños con discapacidad y darles respuesta, y promover y proteger sus derechos y su dignidad de manera inclusiva. En concreto, pretende lo siguiente:

- a) Garantizar el acceso a los servicios para todas las personas con discapacidad;
- b) Impulsar la presencia y las capacidades de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de modo que participen de manera sustancial en los procesos políticos y de desarrollo;
- c) Promover el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Sudán del Sur;
- d) Fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios, las personas con discapacidad y los cuidadores en relación con una prevención y gestión eficaces de la discapacidad; y
- e) Crear un entorno propicio para el empoderamiento económico y social de las personas con discapacidad y el aumento de sus medios de subsistencia.

59. Otro grupo de niños que experimentan discriminación son los niños y niñas asociados con el VIH/sida. Una encuesta sobre el índice de estigmatización realizada en 2016 mostró que el 30 % de las personas que vivían con el VIH declararon haber sido insultadas o agredidas físicamente alguna vez, el 23 % declararon que habían sido excluidas de las actividades familiares alguna vez y el 20 % declararon que estaban excluidas de las reuniones sociales. Se ha establecido un Plan Estratégico Nacional (2012-2017) con objetivos explícitos que, tomando como base las conclusiones de esa encuesta, permita eliminar la discriminación mediante estrategias de promoción y comunicación, dirigidas entre otros a los encargados de la formulación de políticas.

Interés superior del niño

60. La Constitución de Transición (enmendada) de 2011 y la Ley de la Infancia de 2008 constituyen el fundamento jurídico para determinar el principio del interés superior del niño. El artículo 17, párrafos 2 y 3, de la Constitución deja claro que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. El principio y la aplicación del interés superior del niño se desarrolla con más detalle en la Ley de la Infancia de 2008 en distintos contextos. Además, el artículo 6 de la Ley de la Infancia afirma que siempre que la administración pública, ya sea en el plano nacional o de los estados, un tribunal, una autoridad local, una entidad jurídica o cualquier persona determine cualquier cuestión relativa a la crianza, el cuidado o el bienestar de un niño o la administración de sus bienes o de cualquier ingreso derivado de ellos, el interés superior del niño será la consideración primordial.

61. El principio del interés superior del niño es un principio rector para la adopción de decisiones relativas a la responsabilidad parental, la tutela, el acogimiento familiar y la adopción, así como para las controversias sobre la custodia y las visitas (véanse, entre otros, los artículos 42, 64 y 77 de la Ley de la Infancia). Además, el niño debe vivir con sus padres, a menos que ello no redunde en su interés superior, y todo niño que esté separado de uno o de ambos padres tendrá derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

62. El principio del interés superior del niño también informa todos los aspectos de la aplicación de la ley en relación con los niños en conflicto con la ley. No se aplicará el derecho consuetudinario cuando su aplicación sea contraria al interés superior del niño (artículo 4, párrafo 4, de la Ley de la Infancia).

63. En la práctica, a quienes determinan el interés superior del niño en los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales les sería beneficioso contar con una orientación más clara sobre el modo de llevar a cabo esa determinación. El Gobierno ha reconocido que se necesita redoblar los esfuerzos para que los jueces, los trabajadores sociales y otras instituciones públicas integren en la práctica el principio del interés superior del niño. Es necesario implicar a los dirigentes tradicionales para garantizar que se tenga en cuenta el interés superior del niño también en el plano comunitario y en la administración del derecho consuetudinario.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

64. El artículo 17 de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011 otorga a todos los niños el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, algo que se reitera en el artículo 12 de la Ley de la Infancia de 2008, en el que se establece que es responsabilidad de la familia y del Gobierno promover y cuidar la supervivencia y el desarrollo del niño.

65. En el artículo 21, párrafo 2, de la Constitución se establece además que no se impondrá la pena de muerte a los menores de 18 años y en el artículo 21 a) de la Ley de la Infancia también se dispone que ningún niño será condenado a la pena capital ni a la reclusión a perpetuidad.

66. Algunos de los riesgos más graves para la salud de los niños, en cuanto a su supervivencia y desarrollo, son la neumonía, la diarrea, el paludismo, los problemas neonatales y la malnutrición. A menudo, una de las causas principales de la mortalidad de niños menores de 5 años es una combinación de esas enfermedades. La Encuesta de Hogares de 2010 muestra que más de 1 niño de cada 10 muere antes de cumplir los 5 años. Entre las muertes de niños menores de 5 años, la mayoría (más del 60 %) corresponde a lactantes menores de 1 año que, en su mayor parte, fallecen por enfermedades y afecciones infantiles comunes pero prevenibles, como el paludismo, la neumonía y la diarrea. Por otra parte, la desnutrición prevalente contribuye al 45 % de esas muertes infantiles. El paludismo es endémico en todas las partes del país y toda la población corre el riesgo de infectarse. La mayoría de las muertes por paludismo en el país se producen en niños pequeños, mientras que las mujeres embarazadas son más susceptibles de padecerlo.

67. Las consecuencias del desplazamiento para las poblaciones afectadas (saneamiento deficiente, escasez de agua potable y condiciones de vida en hacinamiento) han hecho que aumentaran las enfermedades infecciosas y la malnutrición. Entre las enfermedades comunes entre los desplazados internos cabe citar el cólera, el kala-azar, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea líquida aguda, el paludismo, la malnutrición y el sarampión.

68. Reconociendo su deber de satisfacer las condiciones para la supervivencia y el desarrollo de los niños, el Gobierno ha adoptado diversas medidas destinadas a combatir los problemas de salud infantil, entre ellas la aplicación de la Iniciativa de Salud en los Boma, que tiene por objeto establecer un sistema de salud en el plano comunitario. De resultados del éxito del Programa de Erradicación de la Enfermedad del Gusano de Guinea, Sudán del Sur ha entrado en la etapa de precertificación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de esa enfermedad. A finales de febrero de 2018, el Gobierno no había registrado ningún caso de enfermedad del gusano de Guinea durante 15 meses consecutivos. El país está libre de la transmisión de la poliomielitis salvaje desde 2009. De conformidad con el Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria, del Ministerio de Salud, en 2016 el 52 % de los niños recibieron la vacuna contra el sarampión y el 45 % recibieron las terceras dosis de la vacuna contra la poliomielitis y la vacuna pentavalente antes de cumplir 1 año de edad.

69. Otro riesgo importante para la supervivencia y el desarrollo de los niños del país se deriva de la contaminación de grandes extensiones de terreno con minas terrestres y otras municiones sin explotar. De acuerdo con el Gobierno, respaldado por el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), a finales de 2016, como resultado de decenios de conflicto, había 142 zonas declaradas sospechosas de contener restos de municiones en racimo.

70. En 2011 Sudán del Sur accedió, como Estado sucesor, a la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y tiene un plan estratégico nacional de actividades relativas a las minas para 2012-2016. Los objetivos principales de ese plan son velar por que:

a) Sudán del Sur esté en condiciones de cumplir con todos los instrumentos internacionales relacionados con las minas y pueda ejecutar y gestionar el programa nacional de actividades relativas a las minas;

b) Se registren por completo el alcance y la ubicación de la contaminación por minas, y se localicen, prioricen, limpien y recuperen todas las zonas contaminadas de alto impacto; y

c) El programa nacional de actividades relativas a las minas contribuya a reducir la pobreza y a aumentar el desarrollo socioeconómico al incorporarse en los programas de desarrollo.

71. La Autoridad Nacional de Actividades relativas a las Minas se encarga de la coordinación, planificación y supervisión de las actividades relativas a las minas en el país. Mientras que el UNMAS se encarga de acreditar a las organizaciones, redactar las normas nacionales sobre actividades relativas a las minas, establecer un sistema de gestión de la calidad, gestionar la base de datos nacional y asignar tareas a los operadores, la Autoridad Nacional es la principal responsable de la asistencia a las víctimas y la información sobre los riesgos. Con el tiempo, la Autoridad Nacional asumirá la plena responsabilidad de todas las actividades relativas a las minas. Durante el año 2016 se limpiaron algo menos de 3,5 km² de zonas contaminadas con municiones en racimo, mediante la destrucción de más de 3.000 submuniciones, lo cual supone un aumento significativo con respecto a 2015, cuando se limpiaron casi 1,4 km² y se destruyeron 1.200 submuniciones. Además, el Gobierno, en colaboración con el UNMAS, también está llevando a cabo actividades de sensibilización dirigidas a los niños en las escuelas, entre las que se incluye alentar a los niños a elaborar una canción educativa sobre el peligro de las minas.

Respeto por la opinión del niño

72. En Sudán del Sur los niños tienen derecho a ser oídos, a expresar su opinión y a que esa opinión se tenga en cuenta en cualquier asunto o procedimiento que les afecte, con la

salvedad de que se dará la debida importancia a la opinión de cada niño en función de su edad y madurez. Por ejemplo, en los procesos administrativos y judiciales relacionados con casos de niños se exige tener en cuenta la opinión del niño en cuestión. Concretamente, en relación con la adopción, un niño mayor de 10 años tendrá que otorgar su consentimiento al efecto y si es menor de 10 años se tomará en consideración su opinión. Los procedimientos en los que intervienen niños en conflicto con la ley y las fuerzas del orden se llevan a cabo en una atmósfera de comprensión que permite al niño acusado o sospechoso participar y expresarse libremente.

73. Los artículos 7 y 8 de la Ley de la Infancia definen las consideraciones que deben tenerse en cuenta al determinar cuestiones relativas a un niño, ya sea por un tribunal o por otra persona:

- a) Los deseos y sentimientos comprobables del niño en cuestión se tienen en cuenta en función de su edad y comprensión;
- b) Las necesidades físicas, emocionales y educativas del niño;
- c) Los efectos probables para el niño de cualquier cambio en sus circunstancias;
- d) La edad, el sexo, los orígenes y cualquier otra circunstancia del niño que guarde relación con la cuestión;
- e) Cualquier daño que haya sufrido o corra el peligro de sufrir el niño; y
- f) Cuando proceda, la capacidad de los padres, tutores o cualquier otra persona implicada en el cuidado del niño para satisfacer sus necesidades.

74. Existen barreras culturales arraigadas que impiden que se oigan las voces de los niños en las familias, las comunidades, la sociedad en general y los tribunales y durante los procedimientos administrativos. Es necesario combatir esos obstáculos, aunque ya se han adoptado algunas medidas para crear oportunidades de que los niños expresen sus opiniones y sean oídos. En el plano de la administración pública de los estados y los condados, algunos niños participan en clubes extraescolares que se centran en la paz, los derechos humanos, el teatro y los deportes. En el plano nacional, la Unión Nacional de la Juventud y los Consejos de Estudiantes de Sudán del Sur son las organizaciones juveniles más ampliamente reconocidas y cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Los niños contribuyeron de manera decisiva a impulsar la ratificación de la Convención realizando actividades de promoción entre los grupos parlamentarios en 2015. Todos los años se celebran actividades el Día del Niño Africano y el Día Internacional de la Niña.

75. Cada vez se presta más atención a la contribución positiva y transformadora que pueden aportar los niños y los jóvenes en los procesos de consolidación de la paz y de adopción de decisiones. En el Acuerdo de Paz firmado en agosto de 2015 se destacó la contribución de los jóvenes para supervisar las labores de consolidación de la paz y elaborar la legislación nacional. Hay diferentes iniciativas al respecto encabezadas principalmente por la sociedad civil. En 2016, la ONG Confident Children out of Conflict llevó a un grupo de niños a Kenya para que se reunieran con miembros de la UA a fin de examinar cuestiones relativas a la consolidación de la paz. El Gobierno y algunos organismos de las Naciones Unidas organizan clubes extraescolares en determinadas zonas en torno a los derechos humanos que incluyen componentes de consolidación de la paz.

IV. Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8 y 13 a 17)

El nombre y la nacionalidad

76. Todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad de acuerdo con el artículo 17, párrafo 1, de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011; y los derechos de ciudadanía se establecen en la Ley de Nacionalidad de 2011. La ciudadanía se obtiene de los modos siguientes: por nacimiento si una persona tiene un padre o madre, un abuelo o abuela, o un bisabuelo o bisabuela sudaneses por parte de madre o padre; si una persona es miembro de una de las comunidades étnicas indígenas del país; y si una persona o sus padres

o abuelos han sido residentes habituales de Sudán del Sur desde 1956. La Ley de Nacionalidad permite la doble nacionalidad y establece la igualdad de derechos de mujeres y hombres para transmitir la nacionalidad a sus hijos o cónyuges.

77. La falta de documentación civil, como partidas de nacimiento o documentos de identidad, especialmente en las zonas rurales, sigue siendo un gran problema para el Gobierno, ya que dificulta que cualquier ciudadano pueda aportar pruebas de que uno de sus padres, abuelos o bisabuelos nació en Sudán del Sur. Sin embargo, hay disposiciones en el Reglamento de la Ley de Nacionalidad que permiten la declaración testifical de una amplia gama de personas en beneficio de un solicitante cuando no se dispone de pruebas documentales.

Inscripción de los nacimientos

78. El derecho a la inscripción gratuita de los nacimientos está previsto en el artículo 11 de la Ley de la Infancia de 2008, en la que también se establece el compromiso de aprobar una legislación sobre inscripción de los nacimientos en todo Sudán del Sur. La Asamblea Legislativa Nacional de Transición aprobó la Ley del Registro Civil de 2018, que prevé la inscripción nacional obligatoria de los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones en todo el país.

79. La Encuesta de Salud de los Hogares de Sudán del Sur realizada en 2010 reveló que el 35 % de los niños menores de 5 años fueron inscritos en el registro y alrededor del 29 % tenían una partida de nacimiento. A falta de un sistema de registro civil plenamente establecido, desde 2011 se han prestado servicios gratuitos de notificación de nacimientos a los niños menores de 5 años en determinados centros de salud y ubicaciones. Los padres reciben un formulario de notificación de nacimiento, que se podrá cambiar por una partida de nacimiento cuando esté disponible. Aunque no es tan completa como la inscripción, la notificación de nacimiento permite a los niños acceder a documentos de identidad habilitantes vitales como los pasaportes. Entre 2014 y el primer semestre de 2017, 422.860 niños se beneficiaron de los servicios de notificación de nacimientos.

80. El Gobierno está haciendo todo lo posible por cumplir la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionando identidad jurídica a todos, incluida la inscripción de los nacimientos, y tiene la firme determinación de incrementar las tasas de notificación e inscripción de los nacimientos mediante la aplicación de la Política Nacional de Salud (2016-2026), el Plan Estratégico Nacional de Salud (2017-22) y la Iniciativa de Salud en los Boma, cuyo objetivo es reforzar y promover sistemas de información sanitaria de base comunitaria.

81. Entre otras medidas que ha adoptado el Gobierno para aumentar la tasa de notificación de los nacimientos cabe citar las actividades de comunicación mediante la movilización social, la comunicación interpersonal y los programas de radio. En 2016 se puso en marcha un proyecto piloto conocido como “tarjetas de madre” en tres centros de salud de Bahr el-Ghazal Septentrional. Se expidieron tarjetas de plástico a las madres embarazadas que contenían un código de barras único mediante el cual se almacenan electrónicamente los detalles del embarazo y que, posteriormente, se utilizan para facilitar la notificación del nacimiento. El objetivo de esa iniciativa del Gobierno es tratar de superar el obstáculo del analfabetismo entre la población y las parteras tradicionales, ya que evita la necesidad de escribir o rellenar formularios.

82. Con el apoyo del Gobierno del Canadá y del UNICEF, el Gobierno estableció también un proyecto de Inscripción de Nacimientos para la Salud de la Madre y el Recién Nacido. Se seleccionaron varios estados para que inscribieran todas las notificaciones de nacimiento y reunieran datos para el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales del país.

83. El Gobierno, con el apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, ha introducido mejoras en virtud de las cuales los niños menores de 5 años reciben notificaciones de su nacimiento, así como mejoras también en el acceso a los servicios de notificación de nacimientos, tratando de resolver los cuellos de botella en la oferta y la demanda de esos servicios. Sigue habiendo problemas, entre ellos los altos niveles de analfabetismo,

especialmente entre las mujeres, el hecho de que la mayoría de los nacimientos se producen fuera de los centros de salud y la falta de conciencia de la importancia de la notificación e inscripción de los nacimientos.

Libertad de expresión

84. La Constitución de Transición (enmendada) de 2011 garantiza el derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 24, con las excepciones permitidas por motivos de orden público, seguridad o moralidad. Esto se confirma en el artículo 17 de la Ley de la Infancia, que abarca el derecho del niño a tener una opinión e incluye disposiciones para que los niños busquen, reciban y difundan información e ideas de todo tipo, con excepciones por infringir los derechos de otros. El artículo 17, párrafo 2, de la Ley de la Infancia de 2008 dispone que todo niño tiene derecho a expresar su opinión libremente y a que esa opinión se tenga en cuenta en cualquier asunto o procedimiento que le afecte y que se dará la debida importancia a la opinión de todo niño en función de su edad y su madurez. Además, el artículo 7 de la Ley de la Infancia establece que el niño tiene derecho a ser oído siempre que se discuta cualquier asunto que le concierna. La Ley de la Dirección de Medios de Comunicación consagra el principio de que el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho del público a unos medios de comunicación plurales, es un derecho humano fundamental, protegido en virtud del artículo 24 de la Constitución. Observando la función de control público que ejercen los medios de comunicación libres, la Ley establece que los medios de comunicación de masas estarán protegidos contra la censura de cualquier entidad oficial o no oficial. La Ley de la Dirección de Medios de Comunicación de 2014 prevé el establecimiento de un organismo autónomo de supervisión, la Dirección de Medios de Comunicación, que regule, desarrolle y promueva un sector de los medios de comunicación independiente y pluralista en el país.

85. El Gobierno se enfrenta a diversos problemas para garantizar el derecho de los niños a la libertad de expresión e información en el país, principalmente porque las comunidades tienen percepciones tradicionales de los niños y sus opiniones no siempre se tienen suficientemente en cuenta en entornos como la familia, la escuela y los medios de comunicación y la sociedad en general.

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

86. La Constitución de Transición (enmendada) garantiza la libertad de religión y establece la separación de la religión y el Estado. Prohíbe la discriminación religiosa y dispone que todas las religiones serán tratadas por igual y que la religión o las creencias religiosas no se utilizarán con fines divisorios. Ese derecho se refuerza en la Ley de la Infancia, que establece que todo niño perteneciente a una minoría étnica, religiosa y cultural tiene derecho a disfrutar y desarrollar libremente su cultura y sus creencias, utilizar su idioma y observar su religión.

Libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas

87. La Constitución de Transición (enmendada) defiende que todos tienen derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas, incluidos los niños, y este derecho es inderogable. En la práctica, los niños gozan de acceso a una serie de ONG, asociaciones y clubes juveniles, y participan en las actividades y reuniones que eligen.

Protección de la vida privada

88. El derecho a la vida privada está protegido en el artículo 22 de la Constitución, conforme al cual la vida privada de todas las personas será inviolable y nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada, su vida familiar, su domicilio o su correspondencia, salvo de conformidad con la ley. El artículo 180 de la Ley de la Infancia protege específicamente el derecho a la vida privada de los niños en conflicto con la ley: prohíbe la publicación de

información que pueda conducir a la identificación de un niño infractor o acusado y garantiza la confidencialidad de los registros. El derecho a la vida privada de los niños víctimas y testigos de delitos también se destaca como parte de la capacitación de los funcionarios de las Dependencias de Protección Especial y del Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur, a los que se han expedido Directrices sobre los Derechos de la Mujer y el Niño que exigen que se mantenga la confidencialidad de la información personal y de otra índole.

Acceso a información apropiada

89. El artículo 32 de la Constitución de Transición (enmendada) garantiza el derecho de acceso a la información oficial, con excepciones por la seguridad pública y la privacidad personal. En diciembre de 2013 se promulgaron la Ley de la Dirección de Medios de Comunicación, la Ley de la Corporación de Radiodifusión y la Ley de Derecho de Acceso a la Información, también conocidas como las Leyes de los Medios de Comunicación, que entraron en vigor en 2014. Son los marcos jurídicos fundamentales que promueven la libertad de prensa y acceso a la información en el país. La Ley de Derecho de Acceso a la Información permite a los ciudadanos acceder a la información de los organismos públicos y privados sin cargo alguno. El derecho a la información se detalla en el artículo 36, párrafo 2 j) y t), de la Ley de la Infancia, en virtud del cual la administración pública alienta a los medios de comunicación a difundir información de interés social y cultural para el niño, y adoptar medidas para protegerlo de información y material perjudiciales y difundir información sobre los derechos del niño en el país.

90. En la práctica, la radio es la fuente principal de información para los niños del país y hay muchas cadenas y medios de comunicación diferentes operados por iglesias, organizaciones comunitarias y empresas privadas, así como una emisora de radio de las Naciones Unidas (Radio Miraya), que se puede escuchar en la mayoría de las zonas del país. Para celebrar el Día del Niño Africano en 2017, 30 estudiantes de escuelas de todo Yuba participaron en los programas principales de Radio Miraya, como *Morning Breakfast Show* y *Drive Time*, leyeron las noticias en inglés y árabe y recibieron formación en fotografía y videografía. Además, los niños participaron en programas de televisión de la Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur sobre cuestiones de género y concienciación y derechos del niño.

V. Violencia contra el niño (arts. 19; 24, párr. 3; 28, párr. 2; 34; 37 a) y 39)

Malos tratos y descuido

91. Los niños tienen derecho a ser protegidos contra los malos tratos y el descuido y la Ley de la Infancia de 2008 impone a la administración pública la obligación de garantizar que todo niño que sea víctima de malos tratos reciba el tratamiento y la rehabilitación adecuados. En esa Ley los malos tratos se definen en términos amplios, que incluyen:

- a) Todas las formas de violencia física o mental, lesiones, abusos, trato negligente, maltrato o explotación;
- b) Secuestro y trata, para cualquier propósito o de cualquier forma, por cualquier persona, incluidos los padres o tutores;
- c) El abuso, la explotación y el acoso sexuales, incluidos, entre otros, aunque no exclusivamente, la violación, el incesto, la incitación o la coacción para que un niño sea testigo de una actividad sexual o se dedique a ella;
- d) La utilización de un niño en la prostitución u otras prácticas sexuales; y
- e) La utilización de un niño en espectáculos y materiales pornográficos.

El artículo 36 de la Ley de la Infancia exige que las administraciones públicas de todos los niveles proporcionen recursos efectivos para reparar las violaciones de los derechos del niño,

entre otros medios mediante el acceso a procedimientos de denuncia independientes y adaptados a los niños y a tribunales competentes.

92. El artículo 56 de la Ley de la Infancia de 2008 tipifica como delito el abandono de niños y obliga a los padres a proporcionarles alimentos, ropa, tratamiento médico, alojamiento, cuidados, orientación y protección adecuados. El artículo 57 también tipifica el delito de malos tratos y descuido intencionales de un niño de tal manera que le causen un sufrimiento innecesario. Además, el artículo 30 de la Ley de Educación General prohíbe las relaciones sexuales entre el personal docente y el alumnado, así como los abusos y el acoso sexuales al alumnado. Cualquier docente o miembro del personal que deje embarazada a una alumna será despedido y dado de baja del registro.

93. No existe un sistema nacional de gestión de la información que reúna sistemáticamente datos sobre los casos de malos tratos, violencia, explotación y descuido de niños o las tendencias al respecto. Existe un Sistema de Gestión de la Información sobre la Violencia de Género que funciona en algunas partes del país, aunque el número de entidades que le proporcionan datos es reducido. Según ese sistema de información, en 2016 alrededor del 98 % de los casos de violencia de género denunciados afectaron a mujeres y niñas.

94. Es probable, aunque no está verificado, que solo se denuncien a autoridades como la policía o lleguen a los tribunales oficiales unos pocos casos de malos tratos y descuido de niños. Se examinan más a menudo en tribunales consuetudinarios. Los niños víctimas de malos tratos y descuido pueden tener dificultades si deciden denunciar un hecho delictivo cometido contra ellos.

95. Algunas de las causas subyacentes de los malos tratos y el descuido de los niños son la falta de conocimientos de los padres y la sociedad sobre el desarrollo infantil, y las actitudes tradicionales hacia los niños. Para conseguir que el sistema de denuncia sea más eficaz, el Gobierno adopta medidas dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre las repercusiones de los malos tratos y el descuido de los niños. Además, la cobertura geográfica de los servicios integrados y los mecanismos de remisión para los niños supervivientes de malos tratos y descuido sigue siendo lamentablemente baja. Los servicios de denuncia y de remisión para ayudar a los niños víctimas de malos tratos y descuido necesitan que se fortalezcan los mecanismos institucionales; lo mismo cabe decir de los recursos jurídicos.

Prácticas nocivas, incluidas la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados

96. El matrimonio infantil es un reto importante para el Gobierno. Socava las perspectivas de supervivencia y desarrollo de las niñas y su participación en otras actividades de desarrollo y es una de las razones principales por las que las niñas no siempre terminan la escuela primaria y secundaria. La Encuesta de Hogares de Sudán del Sur (2010) determinó que el 7,3 % de las niñas se casan antes de los 15 años de edad y el 45,2 %, antes de los 18 años. En un estudio realizado en 2010 por el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, con el apoyo del UNICEF, se examinaron los conocimientos y las prácticas en torno al matrimonio infantil y se comprobó que está profundamente arraigado en las normas culturales del país, lo que hace que sea una práctica ampliamente aceptada en la mayoría de las comunidades porque las niñas son percibidas como “bienes” de la familia debido a la práctica del pago de la dote.

97. El artículo 23, párrafo 1, de la Ley de la Infancia establece que todo niño tiene derecho a ser protegido contra el matrimonio infantil. Además, el artículo 30 de esa Ley impone una pena máxima de siete años de prisión por infringir un derecho del niño, incluido el derecho a ser protegido contra el matrimonio infantil.

98. Tomando como base el marco jurídico, el Gobierno ha adoptado medidas para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar el matrimonio infantil, con el apoyo de los asociados. Se ha procurado crear conciencia sobre los efectos perjudiciales de los matrimonios infantiles mediante programas de debate en la radio y consultas comunitarias en siete estados con jefes y dirigentes tradicionales, padres y líderes religiosos y alentando a las niñas a participar en el Día Internacional de la Niña y el Día del Niño Africano.

99. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social forma parte de la campaña en curso de la UA para poner fin al matrimonio infantil. En febrero de 2017, el Gobierno, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), creó un grupo de trabajo para poner fin al matrimonio infantil. El Gobierno también ha elaborado un plan de acción para poner fin al matrimonio infantil para 2030, que se puso en marcha en el año 2018 y está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2040 de la UA para los Niños de África.

100. Algunas de las dificultades a las que se enfrentan el Gobierno y sus asociados en la lucha contra el matrimonio infantil son la dificultad para hacer cumplir las leyes, la falta de partidas de nacimiento para verificar la edad de los niños, el hecho de que las niñas se consideran un bien y llevan consigo la riqueza de la novia a las familias de sus maridos, la falta de denuncia de los casos, la pobreza y la fuerte influencia de los dirigentes comunitarios, tradicionales y religiosos.

101. La mutilación genital femenina es un delito en virtud del artículo 259 del Código Penal y el 80 % de la población desapruueba la práctica. Aunque no es una práctica común (la Encuesta de Hogares indica una prevalencia del 1 % de las mujeres de 15 a 49 años), se producen mutilaciones genitales femeninas, en particular en las regiones fronterizas septentrionales.

Explotación y abuso sexuales

102. La ley ofrece una serie de protecciones contra la violencia sexual y de género contra los niños:

a) El artículo 26 de la Ley de la Infancia de 2008 establece específicamente que toda niña tiene derecho a ser protegida frente a los abusos y la explotación sexuales y la violencia de género, incluidos la violación, el incesto, el matrimonio precoz y forzado, la clitoridectomía y la mutilación genital femenina;

b) Además, el artículo 22, párrafo 2, de la Ley de la Infancia de 2008 establece que todo niño tiene derecho a ser protegido frente a los siguientes tipos de trato y abuso mientras esté bajo la tutela de sus padres, tutores, profesores, la policía o cualquier otra persona que tenga a su cargo al niño: el abuso, la explotación y el acoso sexuales, incluidos, entre otros, aunque no exclusivamente, la violación, el incesto, la incitación o la coacción para que un niño sea testigo de una actividad sexual o se dedique a ella; la utilización de un niño en la prostitución u otras prácticas sexuales; y la utilización de un niño en espectáculos y materiales pornográficos;

c) El artículo 247, párrafo 2, del Código Penal de 2008 establece que la edad mínima del consentimiento sexual para hombres y mujeres es de 18 años. El Código Penal contiene disposiciones estándar que castigan los delitos relacionados con lesiones corporales, secuestro, rapto, violación, agresión y otros delitos sexuales, cometidos contra un niño o cualquier otra persona;

d) El artículo 137 de la Ley de la Infancia de 2008 prevé la protección de los niños testigos y víctimas, cuando sea necesario, incluida la protección contra la intimidación.

103. No es fácil conseguir datos sobre la explotación sexual de los niños con fines comerciales, aunque queda entendido que los niños y las niñas en situación de calle son particularmente vulnerables. La Encuesta de Hogares de Sudán del Sur (2010) determinó que 1 de cada 5 mujeres del país se veía afectada por la violencia de género y el 79 % de los hombres y mujeres que respondieron consideraban justificable que los hombres golpearan a sus esposas o parejas en algunas circunstancias.

104. En 2012, el Gobierno llevó a cabo una Evaluación Integral de Género del País, en la que se determinó que entre las causas más comunes de la violencia contra las mujeres y las niñas están el alcoholismo (31 %), las prácticas culturales (24 %), la pobreza (24 %) y los conflictos (19 %). Entre las demás causas de la violencia cabía citar la poligamia y los malentendidos y sospechas generales entre las parejas casadas. La violencia sexual y de género se percibía ampliamente como “normal” y las palizas a niñas y mujeres se

consideraban una medida disciplinaria correctiva adoptada por sus “tutores” masculinos. En la Evaluación Integral de Género de 2012 también se determinó que la mayoría de las mujeres y los hombres creen justificado que un hombre golpee a una mujer si esta sale sin decirselo, si descuida a los niños o si discute con él. En otra evaluación de las actitudes y creencias sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en Sudán del Sur, la mayoría de los encuestados (el 68 % de las mujeres y el 63 % de los hombres) también estuvieron de acuerdo en que “hay veces en que una mujer merece que la golpeen”.

105. Debido a la presencia de firmes creencias culturales, muchas mujeres y niñas no hablan de esos incidentes de explotación sexual, violación y otros abusos por diversas razones, entre ellas el temor a experimentar el estigma asociado a las personas que han sobrevivido a la violencia sexual, los riesgos de violencia física, la falta de conocimiento de las consecuencias para la salud y el acceso insuficiente a los servicios.

106. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social es el principal responsable de la prevención, protección y respuesta ante la violencia de género en el plano nacional, mientras que en el plano de los estados el mandato corresponde a los Ministerios de Desarrollo Social de los estados. En ese empeño, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social colabora estrechamente con otros ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, el Ministerio de Educación e Instrucción Generales, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio del Interior, así como con asociados internacionales para el desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, a fin de combatir la violencia de género.

107. Un importante mecanismo de coordinación implantado por el Gobierno es el subgrupo temático sobre la violencia de género, que tiene por objeto aumentar la prevención y la respuesta ante la violencia de género y prestarles apoyo, y examinar todos los tipos de violencia de género en sus actividades de coordinación, planificación y promoción. En la actualidad, el subgrupo está compuesto por más de 150 miembros individuales, y participan en sus reuniones quincenales unas 35 organizaciones. Entre los miembros se incluyen organismos de las Naciones Unidas, dependencias pertinentes de la UNMISS, ministerios nacionales, ONG internacionales y nacionales, representantes de otros grupos y donantes.

108. Se están adoptando medidas para prevenir la violencia sexual y de género, aumentar la atención y el apoyo que reciben los niños que sobreviven a ella y fomentar la presentación de más denuncias. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social ha elaborado una Política Nacional de Género que trata explícitamente de la explotación y el abuso sexuales, y en 2014 se elaboraron procedimientos operativos estándar para combatir las diversas formas de violencia de género. En la actualidad, el Hospital Universitario de Yuba presta servicios a las personas que sobreviven a la violencia sexual y de género en un centro único de gestión clínica de la violación. Además, hay un centro de acogida en Torit para las personas que sobreviven a la violencia sexual y de género, en el que pueden acceder a apoyo psicosocial, jurídico y sanitario.

109. Una iniciativa importante del Gobierno, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, fue el establecimiento de Dependencias Especiales de Protección en las comisarías de policía en 2008, que están concebidas para ofrecer un lugar donde las niñas y las mujeres puedan sentirse seguras al denunciar a la policía los delitos relacionados con la violencia sexual y de género. Los agentes de policía reciben capacitación para investigar y llevar ante los tribunales los casos que afectan a mujeres y niños y prestar asistencia jurídica, protección, atención médica y apoyo psicosocial. Existen ya 14 Dependencias Especiales de Protección en las comisarías de todo el país, aunque principalmente en las zonas urbanas. Entre las dificultades para el funcionamiento adecuado de esas Dependencias cabe citar la frecuente redistribución de los agentes que han recibido una capacitación especializada y el uso del espacio de oficinas para otras tareas policiales. También hay problemas de comunicación que surgen porque los agentes de policía se comunican a menudo en árabe y no en inglés.

110. El Gobierno, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impartió capacitación a la policía en relación con el tratamiento de los casos de violencia sexual y de género, así como a abogados. Sin embargo, esa capacitación ha sido de naturaleza *ad hoc*. La policía ha establecido un departamento específico de mujeres policías.

Un acontecimiento importante fue la publicación por el Inspector General de Policía de la Orden Administrativa 10, que aclara la política sobre el Formulario 8, un documento que muchos siguen considerando incorrectamente un requisito previo para que las personas que han sobrevivido a la violencia sexual tengan acceso a la atención médica. Todos los policías infringen esa política si son sorprendidos cobrando una tarifa, ya sea para hacer una copia o para rellenar manualmente el formulario. En 2015 se expidieron al Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur las Directrices sobre los Derechos de la Mujer y el Niño, que tienen por objeto sensibilizar a todo el personal de policía sobre la manera de tratar a las niñas y mujeres que han sido víctimas de la violencia de género o la violencia doméstica o están en contacto con la ley por otros motivos.

111. Se ha creado un Departamento de Justicia Juvenil y de la Mujer, dependiente de la Dirección de la Fiscalía del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, que ha elaborado un manual para los fiscales a fin de evitar la trivialización de los casos de violencia sexual y de género en el sistema de justicia penal.

112. En el plano informal, los niños afectados por la violencia sexual y de género están protegidos por el sector local, que incluye la familia, el clan, la comunidad, las instituciones religiosas, los tribunales consuetudinarios o de aldea y los grupos de mujeres y jóvenes, que actúan principalmente proporcionando mediación y velando por que los niños permanezcan en la familia ampliada. Los niños no participan activamente en esos grupos debido a las barreras culturales.

113. Las consecuencias de los múltiples conflictos armados en la estabilidad y la seguridad del país contribuyen a que prevalezca la violencia contra los niños y aumentan las posibilidades de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos. En 2013 el Gobierno llevó a cabo un estudio de referencia en el que se examinaban las repercusiones de los conflictos en los derechos de los niños, a fin de fundamentar la preparación de un plan de acción para aumentar su protección de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cuanto a la violencia sexual y de género, el estudio determinó que los datos disponibles son limitados.

114. De resultados del estudio de referencia en relación con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno puso en marcha en 2016 un Plan de Acción Nacional para responder a las necesidades de las personas que han sobrevivido a la violencia sexual en los conflictos armados, que se conocerá como el Plan de Acción Nacional de Sudán del Sur 2015-2020 para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la Mujer, la Paz y la Seguridad y las Resoluciones Conexas. Los objetivos de ese detallado Plan de Acción Nacional son:

a) Proporcionar protección a las mujeres y las niñas, incluidas las que tienen discapacidad, contra toda forma de violencia sexual y de género y restablecer el respeto de los derechos humanos, la dignidad humana y la igualdad en Sudán del Sur;

b) Aumentar la participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz y la seguridad, y garantizar su participación en los procesos de consolidación de la paz y de construcción del Estado después de los conflictos;

c) Posibilitar que los interesados en la paz y la seguridad de Sudán del Sur galvanicen sus actividades y crear sinergias y una implicación a largo plazo para aumentar la aplicación de iniciativas centradas en la paz y la seguridad que tengan en cuenta las cuestiones de género en los planos nacional y de los estados;

d) Aumentar la capacidad de los principales agentes que aplican el Plan de Acción Nacional de reunir y analizar datos y presentar informes de calidad, y promover una mayor conciencia pública de los principios subrayados en la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en las resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad relativas a la mujer, la paz y la seguridad; y

e) Asegurar la inclusión de las necesidades de las mujeres y las niñas en las prioridades presupuestarias nacionales de los planes de transición en materia de asistencia elaborados por el Gobierno y todos los programas financiados por los asociados para el desarrollo, incluidas las negociaciones del Nuevo Pacto.

115. En 2015 las mujeres participaron activamente en las negociaciones celebradas en Addis Abeba sobre el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, que incluía un programa de paz y desarrollo sostenible que tenía en cuenta las cuestiones de género. Como parte del Acuerdo firmado en agosto de 2015, las partes beligerantes se comprometieron a abstenerse de practicar actos y formas de violencia sexual y de género, incluidos la explotación y el acoso sexuales. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo también ha capacitado en la promoción de la paz a mujeres, que son interesadas activas en la aplicación del Acuerdo Revitalizado en vigor que se firmó en septiembre de 2018.

116. Con objeto de prevenir y combatir la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos, además de aplicar el Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno ha adoptado las medidas concretas que figuran a continuación. El Código de Conducta de las FDPSS prohíbe explícitamente la violencia sexual y de género. En 2014 el Gobierno firmó un memorando conjunto con la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos con carácter de compromiso. Ese memorando incluye medidas que deberá aplicar el Gobierno, como la publicación y el cumplimiento de órdenes claras a través de las cadenas de mando militares y policiales, la prohibición de la violencia sexual, mecanismos de rendición de cuentas y la expulsión de las fuerzas de seguridad de los autores de los delitos, y la mejora de los servicios multisectoriales para las personas supervivientes. Para ponerlo en práctica, el Gobierno estableció un Grupo de Trabajo Técnico Conjunto sobre la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos, dependiente de la Oficina del Presidente, que incluye a los ministerios e instituciones nacionales correspondientes y a representantes de organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el UNICEF, la UNMISS, ONU-Mujeres, el PNUD y el UNFPA.

Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los castigos corporales

117. La Carta de Derechos consagrada en la Constitución garantiza el derecho a no ser sometido a tortura. En aplicación de esa disposición constitucional, el Gobierno se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y a su Protocolo Facultativo, en el que se exige el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención. El artículo 18 de la Constitución garantiza además que nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que este derecho no puede suspenderse ni siquiera en situaciones de emergencia.

118. El artículo 17 de la Constitución prohíbe el castigo corporal de los niños en todos los ámbitos del hogar y en los entornos de cuidado alternativo: “Todo niño tiene derecho a no sufrir castigos corporales ni tratos crueles e inhumanos por parte de ninguna persona, incluidos los padres, las administraciones escolares y otras instituciones”. Esta disposición también se reiteró en el artículo 21 de la Ley de la Infancia, que prohíbe los castigos corporales por parte de los jefes, la policía, los docentes, los guardias de prisiones o cualquier otra persona. Además, la Ley de Educación General de 2012 prohíbe el castigo corporal de los niños. El Gobierno está trabajando para prevenir totalmente los castigos corporales y proteger la integridad física y psicológica de los niños, mediante la aprobación de legislación que fomente la disciplina positiva y promueva la educación de los niños a través de una metodología no violenta.

Servicios de asistencia telefónica para la infancia

119. En 2015 el Gobierno realizó un estudio de viabilidad por conducto de Child Helpline International estableciendo un servicio de asistencia telefónica en el país. Se prevé que ese servicio adopte las formas siguientes: llamadas telefónicas, mensajes de texto, visitas en persona (actividades de extensión y sin cita previa) y asesoramiento por radio y televisión. Los objetivos del servicio de asistencia telefónica para la infancia son:

- a) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos del niño interpuestas por niños y por adultos que se comunican con el servicio en nombre de niños;
- b) Ofrecer un servicio de intervención a los niños que se enfrentan a vulneraciones de sus derechos, en forma de asesoramiento, remisión o intervención directa;
- c) Llevar a cabo actividades de sensibilización y divulgación sobre el servicio de asistencia telefónica para la infancia con objeto de garantizar su accesibilidad;
- d) Un mecanismo de prevención mediante el asesoramiento; y
- e) Asegurar la colaboración con los servicios sociales existentes y los sistemas de protección infantil disponibles.

El Gobierno ha elaborado una hoja de ruta para el establecimiento del servicio de asistencia telefónica; sin embargo, la aplicación está actualmente en suspenso debido a la falta de recursos financieros y a la inestabilidad constante.

VI. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5; 9 a 11; 18, párrs. 1 y 2; 20; 21; 25 y 27, párr. 4)

Apoyo familiar

120. El Gobierno reconoce que la institución familiar es una fuente vital para el cuidado, la supervivencia y el desarrollo de los niños; por ese motivo, vela por que las madres, los padres y los cuidadores reciban apoyo en su función crucial de crianza de los hijos. El artículo 39 de la Constitución confiere además a los padres el deber de cuidar y criar a sus hijos, por lo que deben rendir cuentas. La Constitución también establece que la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad y estará protegida por la ley y que todos los niveles de la administración pública promoverán el bienestar de la familia y promulgarán la legislación necesaria para su protección. Los niños no serán separados de sus padres o de las personas legalmente autorizadas a cuidarlos contra la voluntad de esos padres o de esas personas, salvo de conformidad con la ley.

121. El capítulo III de la Ley de la Infancia de 2008 confiere derechos y deberes a los padres y los hace responsables de la crianza de los hijos. Si los padres estaban casados en el momento del nacimiento del hijo, tanto la madre como el padre serán responsables de su crianza. Si no están casados, la madre tendrá la responsabilidad parental exclusiva; sin embargo, el padre puede adquirir el cuidado compartido del niño por decisión de un tribunal (artículo 41 de la Ley de la Infancia). Al tomar una decisión sobre la custodia de un niño, la consideración primordial para el tribunal será el interés superior del niño (artículo 54, párrafo 3).

122. El Gobierno ha hecho todo lo posible por apoyar a los padres y cuidadores aliviando la pobreza y mejorando su situación mediante la elaboración de un Proyecto de Redes de Protección Social y Desarrollo de Aptitudes en asociación con el Banco Mundial, dirigido a aumentar las oportunidades de ingresos y empleo entre los grupos pobres y vulnerables, incluido un componente de protección social y transferencias en efectivo. El Gobierno también elaboró una Política Nacional de Protección Social.

Niños privados del cuidado de los padres

123. El Gobierno se enfrenta a diversos problemas en la administración, promoción y protección de los derechos del niño en el país, ya que muchos niños se ven privados del cuidado de sus padres debido a la pobreza, la violencia, la desintegración de la familia a menudo a causa de la poligamia, el divorcio y el desplazamiento de sus hogares como consecuencia de los conflictos. Esos niños se ven privados de su primera línea de protección, sus padres y sus familias y, por lo tanto, se vuelven vulnerables y corren el riesgo de sufrir violencia, explotación, discriminación y abusos. Entre los niños que pueden ser categorizados como carentes de atención parental adecuada cabe citar los siguientes:

- a) Los huérfanos;
- b) Los niños separados y los menores no acompañados;
- c) Los niños de la calle o los mercados;
- d) Los niños vinculados a fuerzas o grupos armados;
- e) Los niños en instituciones gubernamentales y no gubernamentales;
- f) Los niños detenidos;
- g) Los niños de hogares encabezados por un niño;
- h) Los niños que viven con sus padres pero están desfavorecidos, excluidos, no asisten a la escuela, están abandonados o son supervivientes de la violencia sexual y de género;
- i) Los niños que viven con el VIH/sida o con necesidades mentales y físicas especiales, los niños víctimas de la trata o el secuestro, los niños trabajadores, los niños nacidos de relaciones incestuosas y los nacidos sin herencia, los niños afectados por prácticas tradicionales nocivas, los niños discriminados debido a los roles de género, los hijos en prisión de madres condenadas o de madres con discapacidad mental;
- j) Todos los niños que no viven al menos con uno de sus padres, por cualquier razón y en cualquier circunstancia;
- k) Los niños privados del cuidado de su padres que se encuentran fuera de su país de residencia permanente o son víctimas de situaciones de emergencia designados como “no acompañados” o “separados”.

124. Existen marcos jurídicos para garantizar los derechos de los niños privados del cuidado de los padres. Son los siguientes:

- a) El artículo 13, párrafo 4, de la Ley de la Infancia de 2008 indica que todo niño que haya sido separado de sus padres tendrá derecho a reunirse con ellos y recibirá ayuda al efecto de la administración pública;
- b) El artículo 29 de la Ley de la Infancia de 2008 dispone que todo niño refugiado y desplazado recibirá el mismo cuidado y protección que cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su entorno familiar por cualquier motivo;
- c) El artículo 36 de la Ley de la Infancia de 2008 dispone que el Gobierno prestará la asistencia adecuada para criar a un niño cuando no lo hagan los padres u otras personas encargadas de esa responsabilidad;
- d) En el capítulo IX de la Ley de la Infancia de 2008 se prevén medidas que deben adoptarse cuando un niño necesita protección especial debido a la falta de cuidado de los padres, mediante la colaboración de un trabajador social y, cuando sea necesario, mediante procedimientos judiciales;
- e) Por último, el artículo 85 de la Ley de la Infancia permite a los tribunales dictar una orden de adopción, pero dispone que el niño acepte la adopción si es mayor de 10 años. En el caso de un niño menor de 10 años se tendrá en cuenta su opinión.

125. El Gobierno es el principal responsable de ofrecer servicios a los niños que necesitan protección y asistencia especiales o a los niños que están privados de su entorno familiar. El Gobierno desempeña esa función a través de la Dirección de Bienestar Infantil del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social y de las estructuras descentralizadas en el plano de los estados y los condados. Para llevar a cabo sus actividades, la Dirección de Bienestar Infantil trabaja en estrecha colaboración con los asociados para el desarrollo, incluidos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, que complementan las medidas de la administración pública contribuyendo a la programación para los niños. No obstante, también están estrechamente implicadas, de manera muy destacada, otras instituciones de la administración pública en los planos nacional, de los estados y de los condados; entre ellas, la Sección de Justicia para Niños y Mujeres del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, las FDPSS (Dependencias de Protección de la Infancia), el Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur (Dependencias Especiales de Protección para

Mujeres y Niños) y el Comité Especializado sobre Género, Infancia y Bienestar Social de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición. En el plano subnacional, las Direcciones de Bienestar del Niño de los Ministerios de Desarrollo Social de los estados desempeñan una función decisiva.

126. Los niños privados de un entorno familiar también están protegidos por el sector informal, que incluye la familia, el clan, la comunidad, las instituciones religiosas, los tribunales consuetudinarios o de aldea y los grupos de mujeres y jóvenes, que ofrecen mediación y asesoramiento a los niños.

127. Existen redes de organismos que trabajan para localizar a los niños que están separados de sus padres o cuidadores principales debido a los conflictos y el desplazamiento, y reunirlos con ellos. Las redes están formadas por organizaciones internacionales y ONG locales, con el apoyo de los Ministerios de Desarrollo Social de los estados. Desde el inicio del conflicto de 2013, han reunido a más de 5.000 niños con sus familias.

128. En 2013 el Gobierno elaboró una Política Nacional sobre Protección y Cuidado de los Niños sin Atención Parental Adecuada, con los objetivos siguientes:

- a) Prevenir la necesidad de cuidados alternativos y la separación de la familia;
- b) Proporcionar apoyo a la familia y la comunidad para mitigar el riesgo de pérdida de la protección y el cuidado adecuados de los padres; y
- c) Proporcionar un cuidado alternativo informal a los niños sin atención parental adecuada y medidas de respuesta rápida para hacer frente al aumento del número de niños sin atención adecuada que viven en las calles o los mercados, así como cuidado y protección para los niños en situaciones de emergencia.

Una innovación importante de esa Política es la creación de paneles del niño a los que compete decidir el destino de un niño en caso de separación o determinar si la reintegración en la familia de origen es el mejor modo de proceder, de resultados de la evaluación del panel. Esa Política cuenta con un plan de aplicación detallado.

129. Según la Encuesta de Hogares de Sudán del Sur (2010), alrededor del 17 % de la población infantil del país es huérfana. El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil han creado algunas instituciones para huérfanos y de acogimiento familiar informal, de conformidad con las costumbres y tradiciones de Sudán del Sur, con arreglo a las cuales las familias ampliadas se hacen cargo de los niños cuyos padres están ausentes. En la ciudad de Torit, en Ecuatoria Oriental, hay tres orfanatos operados por ONG. Uno de los orfanatos alberga a unos 305 niños, de los cuales 113 son varones.

130. En Yuba hay tres orfanatos; dos están operados por ONG (Confident Children out of Conflict y Straight Link). El Gobierno opera uno. De los 52 niños a los que proporcionaba alojamiento el Gobierno en febrero de 2018, 36 eran varones y 16 niñas. Esos niños fueron remitidos al orfanato por profesionales de la salud, la policía y jefes de diversas comunidades. El objetivo de remitir a esos niños a un orfanato es proporcionarles protección, tratamiento médico, educación y apoyo psicosocial y reunirlos con sus familias cuando sea posible.

131. El orfanato de Straight Link se estableció en 2010 y en febrero de 2018 vivían en él 146 niños. Las instituciones encargadas de los orfanatos del país se enfrentan a los problemas siguientes:

- a) Financiación insuficiente para alimentos, combustible para generadores, suministros médicos y educativos;
- b) Falta de espacio de oficina para asesoramiento y reuniones confidenciales y carencia de zonas de comedor;
- c) Falta de transporte, que dificulta los intentos por reunir a los niños con sus familias; y
- d) Falta de oportunidades de capacitación para el personal, incluidos los trabajadores sociales.

132. El orfanato operado por la ONG Confident Children out of Conflict se creó en 2007 y alberga a unos 100 niños y además presta apoyo a 2.500 niños en hogares alternativos,

cubriéndoles la matrícula escolar y otros gastos. Los niños que viven en el centro suelen haber perdido a uno o a ambos padres o han huido debido al hambre o a que sus padres no pueden permitirse alimentarlos. Varios de ellos tienen enfermedades crónicas, discapacidad y necesidades especiales, y sus padres no podían pagar el tratamiento médico. Muchos de los niños son supervivientes de la violencia de género o han sufrido violencia, malos tratos o descuido y necesitan apoyo psicosocial. Este orfanato experimenta algunos de los problemas siguientes:

- a) La oferta limitada de alojamiento seguro para los niños en riesgo de violencia;
- b) La financiación limitada para la atención de la salud y la alimentación;
- c) El largo tiempo que puede llevar encontrar modalidades alternativas de cuidado para los niños, lo que crea depresión y ansiedad entre los niños sobre su futuro a largo plazo;
- d) La dependencia de las drogas y el alcohol es un problema importante;
- e) Las dificultades para localizar a la familia y reunir al niño con ella, dado que los sistemas tradicionales de apoyo a través de los parientes y la familia ampliada a menudo se han desintegrado; y
- f) El largo tiempo que pueden tener que esperar los niños refugiados para obtener la documentación correcta.

133. El Marco de Políticas de la Comisión de Viudas, Huérfanos y Personas con Discapacidad por Causa de la Guerra atiende específicamente a las necesidades de los niños huérfanos de guerra. La Comisión ha establecido una Dirección de Huérfanos de Guerra, entre cuyas responsabilidades están la supervisión y evaluación de la ejecución de proyectos, programas y actividades en beneficio de los huérfanos de guerra vulnerables. Esa Dirección también colabora con el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social y la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur en cuestiones relacionadas con el bienestar social y económico y la promoción de los derechos de los huérfanos de guerra.

Traslados y retención ilícitos de niños

134. Se dispone de muy poca información sobre la magnitud de la trata interna y transfronteriza de niños. El Gobierno, junto con los asociados internacionales para el desarrollo, ha instituido una serie de medidas para luchar contra todo traslado y retención ilícitos de niños mediante los siguientes marcos jurídicos:

- a) El capítulo VIII de la Ley de la Infancia prohíbe la trata y el secuestro de niños y prescribe penas de hasta diez años de prisión para esos delitos;
- b) Los artículos 278 y 279 del Código Penal de Sudán del Sur de 2008 prohíben también la trata y el secuestro de niños y prescriben penas de hasta 7 años de prisión por secuestro y traslado o control ilícitos de una persona con fines de trabajo obligatorio ilegal. El artículo 276 del Código Penal tipifica como delito la compra o venta de niños con fines de prostitución y prescribe una pena de hasta 14 años de prisión. Además, el artículo 258 prescribe penas de hasta 10 años de prisión para los padres o tutores que hagan que los niños a su cargo participen en el comercio sexual o lo permitan;
- c) En diciembre de 2015 el Gobierno designó al Comité Nacional de Extranjería como mecanismo de coordinación nacional en materia de migración encargado de las cuestiones relacionadas con la trata de niños en el país;
- d) La Ley del Servicio de Policía de 2009 designa al Servicio de Policía como principal encargado de la investigación de posibles delitos de trata de personas y de la aplicación de la ley;
- e) El Gobierno tiene memorandos de entendimiento con Kenya, Rwanda, Etiopía y Uganda para facilitar el intercambio de información, entre otras cosas sobre la trata de personas.

Niños con padres encarcelados

135. La Ley del Servicio Penitenciario de 2011 dispone que, en lo que respecta a las reclusas embarazadas, cuando sea posible se tomarán las precauciones necesarias para que den a luz en hospitales civiles y, si nace un niño en la prisión, no se hará ninguna mención al respecto en los registros. También el artículo 191 de la Ley de la Infancia de 2008 establece los derechos de los niños nacidos en prisión. Los niños suelen permanecer en la cárcel con sus madres hasta los 2 años de edad. Posteriormente son acogidos en hogares de guarda, instituciones o la familia.

VII. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6; 18, párr. 3; 23; 24; 26; 27, párrs. 1 a 3; y 33)

Niños con discapacidad

136. La mayoría de las leyes de Sudán del Sur contemplan los derechos y el bienestar de los niños con discapacidad. La Constitución vela por que todos los niveles de la administración pública garanticen la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, así como el disfrute de sus derechos y libertades. El artículo 29 de la Constitución establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación sin discriminación, mientras que el artículo 31 garantiza además que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todos los servicios de salud.

137. La Ley de la Infancia de 2008 establece la protección de los niños con discapacidad frente a la discriminación basada en su discapacidad. El artículo 9 de esa Ley dispone que quien discrimine a un niño o a sus padres cometerá un delito punible con una pena de prisión no superior a un año o una multa o ambas cosas. Además, el artículo 27 dispone que todo niño con discapacidad tiene derecho a recibir cuidados especiales y gratuitos, tratamiento médico y rehabilitación, a fundar una familia, a participar en actividades deportivas y recreativas y a recibir educación y formación. Además, la Ley ordena a todos los niveles de la administración pública que presten asistencia a todo niño con discapacidad para que disfrute de una vida plena y decente y pueda llegar a bastarse por sí mismo y a lograr la integración social en la máxima medida posible.

La Asamblea Legislativa Nacional de Transición ha aprobado recientemente, como compromiso del Gobierno, la adhesión de Sudán del Sur a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

138. En el Censo de Población y Vivienda realizado en 2008/2009 se determinó que las personas con discapacidad representaban el 5,1 % de la población del país. No se encontraron diferencias entre los géneros y la prevalencia se distribuía uniformemente entre los grupos de edad. Esa cifra del 5,1 % puede ser una subestimación, ya que a nivel mundial, la OMS calcula que el 15 % de la población mundial tiene discapacidad. Una encuesta de hogares realizada en 2016 por el Grupo de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida en Sudán del Sur determinó que alrededor del 15 % de los hogares tenían por lo menos un miembro de la familia con discapacidad. El antiguo estado de Unidad, en el Alto Nilo, tenía la proporción más elevada (26 %) de los hogares en los que había al menos una persona con discapacidad, seguido de la antigua Ecuatoria Central (20 %). Lagos y Bahr el-Ghazal Occidental tenían proporciones relativamente bajas (8 %), mientras que otros estados tenían entre el 10 % y el 18 %. Warrap tenía la mayor proporción (19 %) de los hogares en los que había al menos un enfermo crónico. En 2011 el Gobierno llevó a cabo una Evaluación Nacional de la Discapacidad, que indicó que las deficiencias físicas representan entre el 35 % y el 52 % de todas las discapacidades, las deficiencias visuales entre el 33 % y el 20 %, las deficiencias auditivas entre el 15 % y el 12 %, las deficiencias intelectuales y las enfermedades mentales entre el 17 % y el 10 % y las deficiencias del habla entre el 4 % y el 7 %. Según la Evaluación Nacional de la Discapacidad, las causas de las deficiencias entre la población encuestada con discapacidad grave en Sudán del Sur son las siguientes:

- Enfermedad ocular: 23,5 %
- Guerra o conflictos: 21 %
- Poliomielitis: 21 %
- Enfermedad mental: 14,1 %
- Adquirida al nacer: 12,2 %
- Accidente de tráfico: 10,6 %
- Mordedura de animal o serpiente: 10 %
- Violencia y abuso físicos: 8,8 %
- Quemaduras: 6,7 %
- Hipertensión: 3,8 %
- VIH/sida: 0,9 %

139. Un estudio nacional realizado por el Ministerio de Educación General en 2011 sobre la política de educación inclusiva en Yei, en el antiguo estado de Ecuatoria Central, y Mundri, en la antigua Ecuatoria Occidental, determinó que 700 niños con discapacidad de la muestra tenían deficiencias importantes: epilepsia (39,4 %), deficiencia física (18,3 %), deficiencia auditiva (12,9 %) y síndrome del cabeceo (10,6 %).

140. Los niños con discapacidad de Sudán del Sur pueden sufrir discriminación en el acceso a los servicios de salud, educación, apoyo y protección, y ello se debe a las actitudes negativas del público hacia ellos. Sin una sensibilización del público no se podrá lograr que los niños con discapacidad participen plenamente en la vida social, política y económica.

141. El Gobierno tiene dificultades para proporcionar acceso a la educación a los niños con discapacidad. En la Evaluación Nacional de la Discapacidad de 2011 que realizó el Gobierno se determinó que la asistencia a la escuela de los niños con discapacidad varía entre el 21,9 % y el 24,3 %. La proporción desciende al 17,6 % en el caso de las niñas en todos los lugares evaluados y a solo el 10 % en el antiguo estado de Warrap. Las cifras del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional de 2015 muestran que 17.546 niños de escuelas primarias (el 1,7 %) tienen necesidades educativas especiales. Los grupos más grandes son los niños con discapacidad del aprendizaje (2.966 varones y 2.270 niñas); los niños con visión deficiente, lo que incluye a los niños que necesitan gafas (3.021 varones y 1.895 niñas); los niños parcialmente sordos (2.194 varones y 1.350 niñas); y los niños con deficiencias físicas (1.401 varones y 832 niñas). El número de niños completamente sordos y completamente ciegos que asisten a la escuela es mucho menor.

142. A fin de determinar los principales obstáculos que impiden la inclusión de los niños con discapacidad en la educación, en 2014 el Gobierno llevó a cabo un trabajo de campo como parte de los preparativos para desarrollar la Política Nacional de Educación Inclusiva en 54 escuelas. En las zonas más pobres, la pobreza y la incapacidad de pagar los gastos de escolaridad se consideraban un gran obstáculo. En las zonas menos densamente pobladas, el transporte a la escuela era un factor más importante y el prejuicio también era un factor. Estos motivos, junto con la falta de acceso a los edificios escolares, fue la principal causa citada por la mayoría de los encuestados, seguida de la falta de formación de los docentes, de recursos y de sistemas de comunicación adecuados, como el braille y la lengua de señas.

143. Otra dificultad para el Gobierno es que los niños con discapacidad no tienen acceso a la atención de la salud que necesitan por razones diversas, entre ellas, el hecho de tener que viajar largas distancias desde su lugar de residencia; la falta de servicios de ambulancia; la insuficiencia de la oferta de medicinas en los centros de salud; la actitud negativa de los trabajadores de la salud; la información y conocimientos sanitarios inadecuados, ya que la mayoría de la educación y las campañas sanitarias se realizan en formatos inaccesibles; la falta de material en lengua de señas y braille.

144. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social tiene el mandato de promover y proteger los derechos de los niños con discapacidad. En 2013, el Ministerio elaboró una Política Nacional de Discapacidad e Inclusión de Sudán del Sur, que se rige por el principio

de no discriminación al tiempo que adopta un enfoque basado en los derechos. La Política promueve la acción afirmativa, la diversidad y la inclusividad; además, reconoce que las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo. Su objetivo general es hacer frente y responder a las múltiples vulnerabilidades a las que se enfrentan los niños con discapacidad y promover y proteger sus derechos; pretende lo siguiente:

- a) Garantizar a todos los niños con discapacidad el acceso a los servicios;
- b) Reforzar la presencia y la capacidad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de modo que participen verdaderamente en los procesos políticos y de desarrollo;
- c) Promover el respeto y la protección de los derechos humanos de los niños con discapacidad en Sudán del Sur;
- d) Fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios, los niños con discapacidad y los cuidadores para una prevención y gestión eficaces de la discapacidad; y
- e) Crear un entorno propicio para el empoderamiento económico y social de los niños con discapacidad y el aumento de sus medios de vida.

145. Hasta la fecha, la aplicación de la Política se ha visto obstaculizada por la falta de recursos. Por lo tanto, el Gobierno está defendiendo su difusión y aplicación, de modo que el público pueda tener una comprensión más amplia de los derechos de los niños con discapacidad.

146. Para responder específicamente a las dificultades a que se enfrentan los niños con discapacidad en su acceso a la educación, en 2014 el Gobierno elaboró una Política Nacional de Educación Inclusiva, en colaboración con el Gobierno de Noruega. Esa Política se aparta de la visión médica de la educación especial y asume las dimensiones sociales de la discapacidad, dando prioridad al niño y su familia mediante un aprendizaje centrado en la persona y los planes de vida. Generalmente, la Política tiene como objetivo:

- a) Elaborar un proceso que detecte los obstáculos para que todos logren resultados educativos de calidad y trate de acabar con esos obstáculos;
- b) Aumentar la detección temprana, la evaluación de las necesidades de apoyo de los alumnos en los centros preescolares y escolares, la intervención o la rehabilitación a fin de promover la conciencia sobre las necesidades y capacidades educativas de las personas que corren el riesgo de quedar excluidas del sistema educativo y de la comunidad en general;
- c) Promover y facilitar la inclusión de los niños en riesgo de exclusión en la educación y en la capacitación formales y no formales;
- d) Promover un entorno libre de obstáculos para los alumnos que requieran apoyo adicional en todas las instituciones de enseñanza;
- e) Proporcionar instalaciones, servicios, ayudas técnicas y tecnología, equipo y materiales de enseñanza o aprendizaje especializados, impartir capacitación al respecto y promover su utilización;
- f) Fomentar la capacidad de los docentes y directores de escuela, especialistas y proveedores de servicios esenciales para que presten servicios de calidad a los alumnos que requieran apoyo adicional, incluidos los alumnos con discapacidad;
- g) Aumentar la colaboración y el establecimiento de redes, las alianzas estratégicas y la participación de los interesados, entre ellos los ministerios pertinentes (por ejemplo, los de Salud y Desarrollo Social), los padres de los niños que necesitan apoyo adicional, incluidos los niños con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan en la esfera de la discapacidad y la salud;
- h) Apoyar la investigación y el desarrollo en materia de educación inclusiva para todos los estudiantes (incluidos los que requieren apoyo adicional), la documentación y la difusión de información en la materia;

i) Promover una gestión y coordinación eficaces de los servicios con objeto de contribuir al rendimiento de todos los alumnos y de los que requieran apoyo adicional, incluidos los alumnos con discapacidad.

147. El Plan Estratégico del Sector de la Educación 2017/22, elaborado por el Gobierno, promete aumentar el acceso al aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales, mediante aulas e instalaciones de agua, saneamiento e higiene más accesibles y capacitación en materia de educación inclusiva. Para alentarlo, hay planes encaminados a establecer en cada distrito una escuela pública modelo de educación inclusiva y a crear clubes sociales dentro de las escuelas que aboguen oficial y oficiosamente por los niños con discapacidad.

148. Además del marco jurídico y de políticas, a continuación se resumen algunos de los principales apoyos que presta el Gobierno, con la ayuda de los asociados internacionales para el desarrollo, a fin de que los niños con discapacidad puedan acceder a los servicios:

a) El Centro de Rehabilitación Polivalente para niños y adolescentes de Sudán del Sur se estableció en Yuba en 1984. Ofrece una gama muy amplia de servicios, entre ellos: fisioterapia ambulatoria, terapia ocupacional y logopedia, servicios sociales y educativos, educación inclusiva para niños con discapacidad, un taller ortopédico, un centro de atención primaria de la salud, cuidados en materia de epilepsia, vacunación y un servicio especializado para la salud materno-infantil. Además, capacita a docentes, educadores, proveedores de atención de la salud y profesionales de la rehabilitación;

b) Un Centro de Remisión para la Rehabilitación Física establecido en 2009 con objeto de proporcionar una amplia gama de servicios a adultos y niños que necesiten dispositivos como prótesis, órtesis, muletas, andadores, sillas de ruedas, triciclos y sillas de ruedas deportivas. Entre otros servicios que ofrece cabe citar la fisioterapia, el asesoramiento y el tratamiento médico. El Centro tiene capacidad para albergar a 60 pacientes internos a la vez, además de los pacientes externos de la ciudad de Yuba. Además del Centro de Yuba, hay un Centro de Rehabilitación en Rumbek, en el antiguo estado de Lagos, y una clínica mensual en Wau, en el antiguo estado de Bahr el-Ghazal Occidental. Entre 2009 y mayo de 2014, más de 6.000 pacientes recibieron los diversos servicios de los Centros de Rehabilitación de Yuba y Rumbek;

c) El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social trabaja actualmente en cooperación con la escuela para ciegos de Ecuatoria Central de Buluk, en Yuba, y también está impulsando el Centro Educativo para Ciegos y Sordos de Rejaf, en Yuba (los planes al respecto están actualmente en suspenso a la espera de las asignaciones de fondos). Una vez abierto, ese Centro tendrá capacidad para 350 estudiantes;

d) El Gobierno estableció en 2011 una Comisión de Viudas, Huérfanos y Personas con Discapacidad por Causa de la Guerra para que ejecutara diversos proyectos, como por ejemplo la capacitación en agricultura y autoempleo dirigida a las viudas y los huérfanos con discapacidad de miembros del ELPS. Lamentablemente, sus medidas se han visto obstaculizadas por la falta de financiación en los últimos años;

e) La Fundación Leonard Cheshire ha establecido un proyecto de Voces Jóvenes, operado por niños y jóvenes con discapacidad que han emitido más de 200 programas de debate en diferentes emisoras de radio para concienciar sobre sus derechos.

Salud y servicios sanitarios

149. El artículo 31 de la Constitución de Transición (enmendada) de la República de Sudán del Sur de 2011 prevé la prestación de servicios gratuitos de atención primaria de la salud y de emergencia a todos los ciudadanos. En virtud de la Ley de la Infancia de 2008, todos los niños tienen derecho a la atención sanitaria básica gratuita, incluido el derecho a la inmunización gratuita, y a no ser objeto de discriminación por su estado de salud (entre otras cosas, por su estado serológico respecto del VIH). El artículo 36 de la Ley de la Infancia establece la obligación de todos los niveles de la administración pública de garantizar que todos los niños tengan acceso a los servicios de atención primaria de la salud y a medidas para reducir la mortalidad infantil.

150. Los servicios de salud se prestan con arreglo al esquema siguiente: dependencia de atención primaria de la salud, centro de atención primaria de la salud, hospital del condado, hospital del estado, y hospital terciario. Los departamentos de salud de los condados son responsables de gestionar los servicios de atención primaria de la salud. Sin embargo, los decenios de conflicto han afectado al sistema sanitario y han socavado su eficiencia en la prestación de servicios de salud eficaces para los niños. Por consiguiente, la cobertura de los servicios es escasa y depende en gran medida del apoyo periódico de los asociados internacionales para el desarrollo.

151. Según la Encuesta de Hogares del Sudán Meridional de 2010, el país tiene tasas elevadas de mortalidad infantil (75 muertes por cada 1.000 nacidos vivos) y de mortalidad de niños menores de 5 años (105 muertes por cada 1.000 nacidos vivos). La mayoría de las muertes de lactantes (más del 60 %) son de niños menores de 1 año y la mayoría de ellas se deben a enfermedades y trastornos infantiles comunes pero prevenibles, como el paludismo, la neumonía y la diarrea, que se ven exacerbados por la desnutrición. En la Encuesta de Salud de los Hogares de 2010 se determinó que los niños de las zonas urbanas tenían tres veces más probabilidades de acceder a los hospitales que los niños de las zonas rurales y que los niños de las zonas urbanas tenían casi el doble de probabilidades que los niños de las zonas rurales de recibir antibióticos por una presunta neumonía (52,4 % frente a 27,8 %).

Cuadro 3

Tendencias de determinados indicadores de resultados sanitarios

<i>Indicador</i>	<i>2006</i>	<i>2010</i>
Tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100.000 nacidos vivos)	2 054	2 054
Tasa de mortalidad de niños menores de 1 año (muertes por cada 1.000 nacidos vivos)	102	75
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (muertes por cada 1.000 nacidos vivos)	135	105
Retraso del crecimiento	34,4 %	28 %
Insuficiencia ponderal	32,9 %	31 %

Fuente: Encuestas de Hogares de Sudán del Sur de 2006 y 2010.

152. El Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria, del Ministerio de Salud, indica que en 2016 alrededor del 52 % de los niños recibieron la vacuna contra el sarampión y el 45 % recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis y la vacuna pentavalente antes de cumplir 1 año. En mayo de 2017 se inició una campaña nacional de inmunización contra el sarampión.

153. Según la Encuesta de Indicadores de Paludismo de 2013, la prevalencia del parásito del paludismo medida por una prueba de diagnóstico rápido iba desde menos del 10,6 % en la región del gran Alto Nilo hasta alrededor del 53,4 % en la región de gran Ecuatoria; la media para el país era de alrededor del 30 %. La prevalencia del paludismo era más elevada en las zonas rurales que en las urbanas. La prevalencia en las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años había aumentado al 30 % y al 15,3 %, respectivamente, con respecto al 24,5 % y el 9,9 % de la Encuesta de Indicadores de Paludismo de 2009. Con arreglo a la Encuesta de Indicadores de Paludismo de 2013, hasta alrededor del 44,9 % de los niños menores de 5 años habían sufrido fiebre durante las dos semanas anteriores a la encuesta, mientras que en la de 2009 el porcentaje era del 35 %.

154. En 2010 la Encuesta de Hogares del Sudán Meridional calculó la mortalidad materna en unas 2.054 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, debido a la inseguridad, el Gobierno no pudo finalizar la actualización de la Encuesta de Mortalidad Materna que estaba prevista para 2016. Una evaluación de la atención obstétrica y neonatal de emergencia que llevó a cabo en 2013 el Ministerio de Salud indicó que la hemorragia posparto era la principal causa de muerte materna en los centros de salud del país estudiados. Los resultados de una encuesta más reducida realizada en 2014 se exponen en el cuadro siguiente.

Cuadro 4
Causa principal de la mortalidad materna en número y porcentaje, 2014

	<i>Muertes examinadas (n=78)</i>	
	<i>Número</i>	<i>Porcentaje</i>
Causas directas**	30	38
Hemorragia preparto	4	5
Hemorragia posparto	14	18
Placenta retenida	1	1
Parto prolongado u obstruido	1	1
Ruptura uterina	1	1
Sepsis posparto	4	5
Preeclampsia grave o eclampsia	5	6
Causas indirectas	14	18
Paludismo o anemia	4	5
Relacionadas con el VIH/sida	2	3
Hepatitis	2	3
Otras****	6	8
Ninguna causa enumerada	34	44

Fuente: Ministerio de Salud, Informe de evaluación sobre emergencias obstétricas y neonatales, 2014.

155. Según la Encuesta sobre Salud de Hogares del Sudán Meridional realizada en 2010, alrededor del 46,7 % de las mujeres embarazadas tuvieron por lo menos 1 consulta prenatal con un profesional cualificado, mientras que a alrededor del 17 % se le habían recomendado 4 consultas. De los datos del Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria se desprende que en 2015 la cobertura de 1 consulta de atención prenatal fue del 38,6 % (lo que supone una disminución con respecto al 53 % en 2014) y la de 4 o más consultas fue de alrededor del 17,7 % (lo que también supone una disminución con respecto al 24 % en 2014), utilizando como denominador la población embarazada estimada. Esto refleja la probabilidad de que a nivel nacional las cifras hayan empeorado como resultado del conflicto, especialmente en las zonas afectadas. Las mujeres embarazadas experimentan dificultades prácticas para acceder a la atención prenatal, entre ellas las grandes distancias a los centros de salud, la falta de medios de transporte desde los centros de salud y hacia ellos, las inundaciones y el mal estado de las carreteras y la exigencia del pago de la atención sanitaria en algunos centros. Otros factores que cabe citar son las ideas erróneas sobre los beneficios de la atención prenatal y la escasa percepción del riesgo de complicaciones.

156. Según los datos administrativos, el número total de partos en los centros de salud ha aumentado moderadamente desde 2011, pero en 2015 todavía representaba solo el 13 % de los partos estimados en el país. La tasa total de partos atendidos por parteras calificadas seguía siendo solo de alrededor del 8 % en 2015 (era del 7 % en 2014), muy por debajo de la meta de alrededor del 30 % fijada en el Plan de Desarrollo del Sector de la Salud 2012-2016. En 2016, la tasa de cesáreas también siguió siendo muy baja y no aumentó con respecto al 0,3 % de 2014; suponía asimismo una reducción con respecto al 0,5 % de 2015, y es muy inferior a la tasa ideal del 10 % al 15 % que generalmente suele asociar con efectos preventivos en la morbilidad y la mortalidad maternas y perinatales la OMS.

157. El informe de resultados de la estimación nacional de VIH y sida de 2015 determinó que en promedio, la prevalencia del VIH en adultos se calculaba en casi el 2,7 %, con amplias variaciones dentro de las regiones y entre ellas. Según los resultados de 2016 del Sistema Spectrum ofrecidos por la OMS, había más de 138.586 huérfanos relacionados con el sida de entre 0 y 17 años. De ellos, los que vivían con el VIH y eran niños menores de 15 años eran unos 11.993; alrededor de 164.370 personas vivían con el VIH y tenían entre 15 y 49 años. El Plan Estratégico Nacional sobre el VIH y el Sida (2013-2017) se preparó para orientar la

respuesta multisectorial nacional a la epidemia del VIH durante cinco años y en él se detallan los resultados, productos, indicadores e intervenciones prioritarias. El Plan se ajusta a los marcos nacionales e internacionales, incluido el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

158. El examen del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional de 2016 determinó que solo impartía educación sexual un número relativamente reducido de escuelas primarias: alrededor del 27 % impartía educación sobre la transmisión y prevención del VIH, alrededor del 23 % impartía educación sobre competencias para la vida y un 18 % impartía educación sobre la sexualidad. El porcentaje de educación sexual en las escuelas secundarias también era bajo: el 45 % impartía educación sobre la transmisión y prevención del VIH, el 30 % impartía educación sobre competencias para la vida y el 32 % impartía educación sobre la sexualidad. En total, el 11 % de los docentes masculinos de los tres tipos de escuelas (sistemas de educación alternativa, primaria y secundaria) y alrededor del 20 % de las docentes femeninas recibieron capacitación en la enseñanza de la educación sexual.

159. El acceso al agua potable salubre en el país es uno de los principales desafíos para el Gobierno. Según las cifras de la OMS y el UNICEF, en 2015 solo alrededor del 6 % de la población tenía acceso a agua corriente en sus hogares, aunque el 61 % tenía acceso a otras mejoras en el suministro de agua, como pozos de sondeo y fuentes protegidas. Alrededor del 16 % accedía al agua sin otras mejoras en el suministro y el 17 %, a masas de aguas superficiales como los ríos. Estas estimaciones están desglosadas por zonas urbanas y rurales y se puede observar que el abastecimiento de agua en las zonas urbanas es ligeramente mejor, aunque la diferencia es mínima. En lo que respecta al acceso a las instalaciones sanitarias, se calcula que alrededor del 74 % de la población del país practica la defecación al aire libre.

160. Conseguir que aumente el acceso equitativo de los niños a los servicios básicos de salud es fundamental como medio para alcanzar el objetivo básico del sector de la salud de reducir rápidamente las tasas de mortalidad materna e infantil. Con ese fin, el Gobierno ha adoptado medidas mediante la introducción de:

a) La Política Nacional de Salud 2016-2026, que establece una orientación estratégica para el desarrollo en el sector de la salud y define los elementos básicos de la salud y la nutrición, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. El objetivo general de esa Política es fortalecer el sistema nacional de salud y las alianzas que trabajan para superar los obstáculos que impiden que se preste con eficiencia el Conjunto Básico de Servicios de Salud y Nutrición;

b) El Plan Estratégico Nacional del Sector de la Salud para el período 2017-2021, que constituye una medida fundamental para ejecutar la Política Nacional de Salud 2016-2026 y alcanzar la cobertura sanitaria universal para los ciudadanos del país;

c) La aplicación del Conjunto Básico de Servicios de Salud y Nutrición en el plano comunitario, en gran medida mediante la Iniciativa de Salud en los Boma, cuyo objetivo es establecer una estructura oficial para el sistema de salud a nivel comunitario que preste un conjunto integrado de servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades y tratamientos escogidos y formación de formadores y contribuya a su implantación; y

d) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible encaminados a poner fin a las muertes prevenibles de recién nacidos y niños menores de 5 años. Además, el Gobierno está elaborando un plan estratégico de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil.

La seguridad social y los servicios y establecimientos de guarda de niños (arts. 26 y 18, párr. 3) y el nivel de vida (art. 27, párrs. 1 a 3)

161. Durante muchos años, la familia ampliada ha sido la tradición de las comunidades de Sudán del Sur; en ella, los miembros comparten los beneficios sociales y económicos. Los períodos de conflicto, el desplazamiento de poblaciones y el surgimiento de sistemas sociales modernos en las zonas urbanas han contribuido a que disminuyera en la mayor parte del país el sistema de apoyo que presta la familia ampliada.

162. La Ley de la Infancia de 2008 reconoce que es responsabilidad de la familia y del Gobierno promover y cuidar la supervivencia y el desarrollo de los niños. Queda mucho por hacer para consolidar vías sostenibles que permitan salir de la pobreza, de modo que los niños tengan un mayor acceso a la educación, un mejor acceso al agua potable y al saneamiento, mejores resultados sanitarios y medios de vida e ingresos sostenibles a nivel de los hogares. Se trata de una empresa difícil en un contexto en el que el 51 % de la población vive por debajo de los umbrales de pobreza nacionales.

163. En el Plan de Desarrollo de Sudán del Sur (2011-2013) se señala la importancia de la protección social para alcanzar los objetivos de desarrollo del país en el marco de su pilar de desarrollo social y humano. El objetivo específico de la protección social que figura en el Plan es trabajar progresivamente para reducir el riesgo, la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión económica y social en todo el país. En 2013 el Gobierno, en asociación con el Banco Mundial, elaboró un proyecto de redes de protección social y desarrollo de aptitudes, que tiene por objeto aumentar las oportunidades de ingresos y el empleo de los grupos pobres y vulnerables, entre otros medios mediante un componente de protección social y transferencias en efectivo. En el marco de ese proyecto, en 2014 se elaboró una Política Nacional de Protección Social, que tiene por objeto acelerar progresivamente el acceso universal a los servicios sociales básicos para la población de Sudán del Sur con el fin de fomentar la capacidad humana y promover su dignidad. También se creó una Dependencia de Protección Social para encabezar y coordinar las actividades relacionadas con la protección social.

164. El Gobierno y los asociados internacionales elaboraron las Directrices para la Gestión Comunitaria de la Malnutrición Aguda, que han sido aprobadas por el Consejo Nacional de Ministros y se están aplicando actualmente en el país. Por lo que respecta a la prevención, también se han aprobado las Directrices y la Estrategia sobre la Nutrición Materna, Infantil y Juvenil, que en la actualidad se están publicando y difundiendo.

VIII. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)

El derecho a la educación y los propósitos de la educación

165. Sudán del Sur reconoce que la educación es un derecho humano básico y, por lo tanto, el Gobierno proporciona una educación permanente, de calidad y equitativa a todos los niños, jóvenes y adultos, a precios asequibles y basada en las necesidades y aspiraciones de la población. La educación permitirá que los niños se conviertan en ciudadanos responsables y productivos, lo que es de vital importancia en un país en el que un tercio de la población está en edad escolar.

166. En Sudán del Sur, el Ministerio de Educación e Instrucción Generales, al igual que las organizaciones asociadas, aplica medidas para hacer efectivo el derecho a la educación. El marco para hacerlo efectivo se establece mediante los reglamentos y leyes que se indican a continuación:

- a) Constitución de Transición (enmendada);
- b) Ley de la Infancia de 2008;
- c) Ley de Educación General de 2012;
- d) Política Nacional de Educación General (2017-2027);
- e) Plan Estratégico de Educación General (2012-2017);
- f) Requisitos Básicos e Indicadores de Estándares Mínimos para las Escuelas (2012);
- g) Política Nacional de Educación Inclusiva (2014);
- h) Guía de Aplicación del Sistema de Educación Alternativa (2008);
- i) Reglamento de la Junta de Gobernadores/Comité de Gestión Escolar (2012).

167. El artículo 29 de la Constitución de Transición (enmendada), que se refiere al derecho a la educación, es el fundamento del marco jurídico y de políticas de la educación en el país, así como el artículo 38, relativo a la educación, las artes y las ciencias. El derecho a la educación garantiza el acceso a la educación a todos los ciudadanos sin discriminación por motivos de religión, raza y origen étnico, estado de salud, incluido el estado serológico respecto del VIH/sida, género o discapacidad. Los dos artículos también establecen que la educación será promovida por todos los niveles de la administración pública. El artículo 29 de la Constitución y la Ley de Educación General de 2012 establecen que la educación será gratuita y obligatoria en los niveles primario y secundario.

168. Conforme a la definición de la Ley de Educación General de 2012 y el Plan Estratégico del Sector de la Educación (2012-2017), la visión a largo plazo para el sector de la educación es formar una nación educada e informada e introducir una serie de reformas para aumentar la calidad de la educación y el acceso a ella con el fin de reducir el analfabetismo en el país.

169. La Ley de Educación General establece que la educación fomentará el desarrollo de Sudán del Sur mediante la integración, la paz, la autosuficiencia y el patriotismo; y el respeto y la tolerancia para con otras culturas, tradiciones, opiniones y creencias. Esa Ley también procura promover la equidad de género en todos los sistemas de enseñanza primaria, secundaria y alternativa y en todas las demás instituciones de enseñanza. Procura asimismo empoderar a las personas basando la educación en las culturas y tradiciones del país, incluido el uso de los idiomas nacionales en la educación formal. Además, atiende a las necesidades de los alumnos con discapacidad para tener acceso a la educación y promueve la conciencia ambiental, el equilibrio y el respeto de los hábitats naturales y humanos. La Política Nacional de Educación Inclusiva de 2014 ofrece un marco en el que se impulsa y promueve el acceso a una educación equitativa, de modo que la educación guarde relación con el contexto local y puedan participar en ella todos los alumnos.

170. El artículo 17 de la Constitución prohíbe todos los castigos corporales en todos los ámbitos, incluidos el hogar, la escuela y los centros de cuidados alternativos. El artículo 17 también dispone que todo niño tiene derecho a no sufrir castigos corporales ni tratos crueles e inhumanos por parte de ninguna persona, incluidos los padres, las administraciones escolares y otras instituciones. Esto se reitera en el artículo 21 de la Ley de la Infancia de 2008, que prohíbe los castigos corporales por parte de los jefes, la policía, el personal docente, los guardias de prisiones o cualquier otra persona. Además, la Ley de Educación General de 2012 prohíbe el castigo corporal en el sistema educativo.

171. Los principios y disposiciones para la aplicación de políticas y el establecimiento de estructuras reguladoras están consagrados en la Ley de Educación General de 2012. Esa Ley abarca los niveles del sistema de educación general formal del país, que consiste en 2 años de preescolar, 8 años de primaria formal (incluido un examen de fin de estudios primarios) y 4 años de secundaria formal, incluido un examen de fin de estudios secundarios. También incluye disposiciones para un sistema de educación alternativa y de formación profesional.

172. El Ministerio de Educación General, en colaboración con los Ministerios de Educación de los estados, estableció el Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación. Recoge datos sobre las escuelas y la matriculación de los niños mediante controles periódicos de profesores y administradores de la educación que se llevan a cabo todos los años. Reunir datos creíbles y fiables sobre educación a través de ese Sistema ayuda a fortalecer los sistemas existentes y crear otros nuevos. Mediante la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento, el análisis y la difusión de información sobre la educación, el Sistema facilita los debates de políticas y la toma de decisiones basados en información.

173. Según el Folleto de Estadísticas Nacionales de Educación de 2016, había alrededor de 36.858 docentes reconocidos en el país, un poco más que los registrados en 2015. De ellos, 2.697 trabajaban en el desarrollo en la primera infancia, 25.987 en la educación primaria y 2.596 en la educación secundaria. Los docentes son predominantemente hombres. Pasan tres años en la formación inicial en los Institutos Nacionales de Formación de Docentes. En los condados se han establecido Centros Educativos de Condado para la capacitación a corto plazo. Un logro importante ha sido el establecimiento de definiciones claras de la estructura y las cualificaciones del personal que se examinan para que se adecúe a los puestos.

174. El Sistema de Educación Alternativa es una educación no formal que se imparte en cinco esferas principales y en la que está inscrito alrededor del 43,2 % de los niños. Ofrece puntos de entrada y salida flexibles para niños, jóvenes y adultos. A continuación se presenta la estructura de estos sistemas educativos en Sudán del Sur:

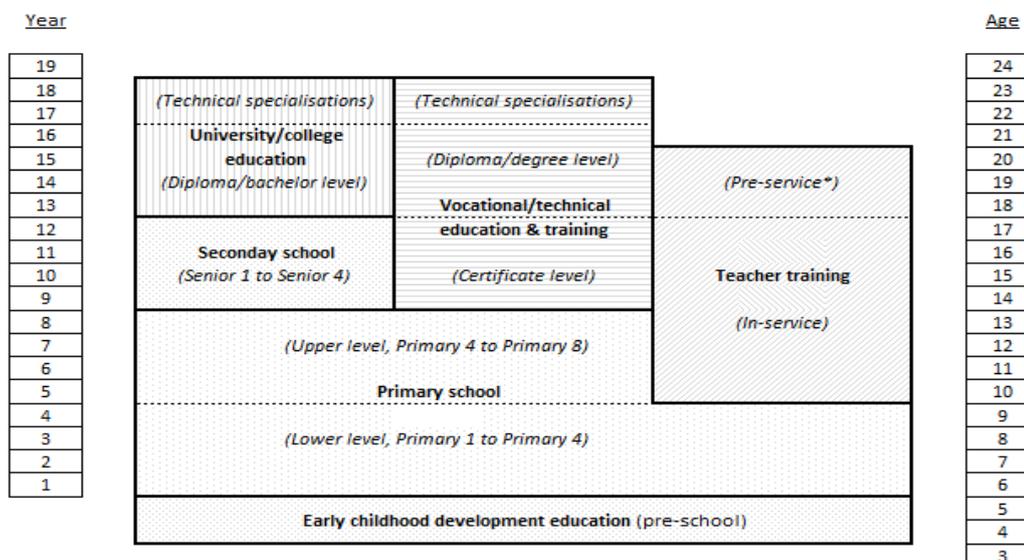
- a) Programa de Aprendizaje Acelerado: condensa en 4 años el sistema de educación de 8 años, lo que permite a un niño de más edad ponerse al día con otros que se incorporan a la escuela a la edad de 6 años;
- b) Educación de las Niñas en la Comunidad: se trata de escuelas establecidas para niñas en las aldeas o zonas que están lejos de las escuelas principales con objeto de dar confianza a los padres que pueden no estar satisfechos si sus hijas viajan a lugares lejanos;
- c) Educación Pastoral: este tipo de educación se establece para los nómadas que se desplazan con su ganado cada estación. Los docentes los siguen cuando se desplazan y una vez que se asientan, comienzan las clases;
- d) Programa Intensivo de Inglés: este programa está destinado al personal docente de origen árabe, especialmente a quienes vinieron del Sudán después de la independencia de Sudán del Sur. Se les imparten cursos intensivos antes de enseñar en inglés; y
- e) Programa de Alfabetización de Adultos: dedicado a los niños mayores y a los adultos que no recibieron educación durante los 21 años de la guerra de liberación.

175. El Gobierno ha hecho todo lo posible para promover y establecer el desarrollo del niño en la primera infancia, y casi todas las escuelas públicas cuentan ya con clases de educación en la primera infancia para niños de 3 a 5 años de edad. Sudán del Sur cuenta con 702 centros de educación en la primera infancia y un programa de estudios para los dos años de preescolar. En total, el 52,6 % de los varones y el 47,4 % de las niñas asisten a los centros de educación en la primera infancia. En las zonas urbanas, la educación en la primera infancia ha conocido un fuerte despegue. Sin embargo, no funciona tan bien en las zonas rurales porque la mayoría de los niños que viven en ellas son llevados directamente a la escuela primaria a la edad de 5 o 6 años.

176. El Gobierno ha elaborado la estrategia y los módulos de capacitación para la educación en la primera infancia. También se han llevado a cabo actividades de concienciación dirigidas a las comunidades, especialmente los padres, sobre la importancia de la educación en la primera infancia; esta concienciación ha tratado de contrarrestar las actitudes culturales negativas contrarias a la educación de las niñas. Además, el Gobierno ha establecido un mecanismo de coordinación entre el Ministerio Nacional de Educación General y los estados, encabezado por el Director de Desarrollo en la Primera Infancia.

Cuadro 5

Escalera de educación del Gobierno de la República de Sudán del Sur



* Pre-service teacher training lasts three (3) years for P8 leavers and two (2) years for secondary leavers

Tasas de alfabetización, tasas brutas y netas de matriculación, tasas de retención, finalización y transición y número de alumnos por profesor

177. Según las estadísticas actuales del Gobierno, la tasa bruta de matriculación escolar en la educación primaria es del 69,8 %, mientras que la tasa neta es del 43,5 %. La tasa bruta de matriculación escolar en la educación secundaria es del 9,3 %, mientras que la tasa neta es del 2,9 %. La tasa media de transición de las estudiantes femeninas en todos los cursos es del 66 %, mientras que la tasa media de transición de los estudiantes varones es del 67 % en todos los cursos. Las tasas de retención, finalización y transición han mejorado especialmente después de la introducción del programa de Educación de Niñas de Sudán del Sur.

178. El número medio de alumnos por profesor es de 40. Según el informe del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación de 2016, el número medio nacional en la escuela primaria (en las zonas abarcadas por el estudio del Sistema, que no era de ámbito nacional) era de 42,3 alumnos en 2016 (43,7 en las escuelas públicas y 39,1 en las escuelas no públicas). La tasa más alta se daba en el condado de Twic, en el estado de Yonglei (54,5 alumnos), y la más baja en el condado de Yuba, en el antiguo estado de Ecuatoria Central (33,4 alumnos). En cuanto a la escuela secundaria, el número global de alumnos por profesor era de 20,6, e iba desde los 40,6 en la parte occidental del antiguo estado de Lagos hasta los 14 en Kapoeta, en el antiguo estado de Ecuatoria Oriental. Las tasas de inscripción en las clases son más altas, lo que parece indicar que cada docente es responsable de un gran número de alumnos, especialmente en las zonas urbanas adonde han migrado niños debido a los conflictos en curso.

Cuestiones prioritarias

179. Los conflictos, la crisis económica y la inseguridad han empeorado gravemente la situación de la educación en todo el país. Una evaluación realizada por el Gobierno y los asociados internacionales para el desarrollo en 2016 mostró una caída en la matriculación de casi el 10 % entre 2013 y 2016, causada en parte por la inseguridad, los medios de vida y los factores económicos, que se consideran las razones de la deserción escolar o la falta de asistencia a la escuela por parte de los alumnos. Entre las niñas, las causas principales de deserción y no asistencia eran el matrimonio y el embarazo. Las largas distancias que hay que recorrer para llegar a la escuela y la imposibilidad de pagar los gastos de escolaridad se citaron como otras razones importantes para la deserción escolar de niños y niñas.

180. La infraestructura de las escuelas sigue necesitando atención, ya que no hay suficientes espacios para el aprendizaje. En el informe del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación de 2016 se constató que solo el 34 % de las escuelas primarias eran estructuras permanentes, el 35 % eran estructuras al aire libre y el 21 %, estructuras semipermanentes (las que consistían solo en un techo, una tienda de campaña y otros elementos conformaban el resto). Aunque el entorno escolar en muchos lugares ha mejorado gracias al vallado, todavía muchos niños estudian en espacios al aire libre y bajo los árboles. La educación también se ve limitada por la falta de libros de texto. En las escuelas primarias, el índice es de 4:1, o de 8:1 en zonas remotas. En las escuelas secundarias, la situación es aún peor y dependen principalmente de las muestras del programa de estudios que se proporcionan a los docentes. Otra limitación es que muchos docentes han tenido un acceso limitado a una formación sistemática.

181. Las altas tasas de deserción escolar de los alumnos conducen a su vez a altas tasas de desempleo. Para responder a ello, el Gobierno está haciendo todo lo posible por promover el emprendimiento, reintroduciendo y ampliando la enseñanza y la formación técnica y profesional, que dotan al estudiante de habilidades prácticas y aplicables, lo que conduce al empleo.

182. Entre las prioridades actuales del Gobierno en materia de educación general está el desarrollo del sector mediante:

- a) La formación y el desarrollo profesional de los docentes;
- b) La aplicación de nuevos mecanismos de financiación para respaldar a las escuelas y la educación de las niñas;
- c) El desarrollo del Sistema de Educación Alternativa prestando atención especial a la alfabetización de adultos y la educación para los niños de lugares remotos; y
- d) El fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de enseñanza.

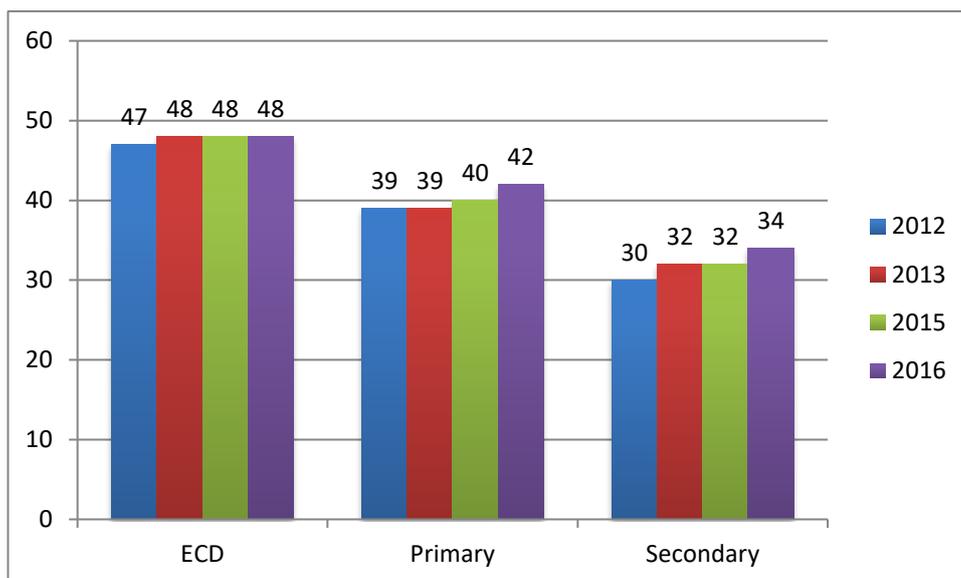
Los objetivos del Gobierno son aumentar el acceso a una educación de calidad y promover la equidad; facilitar la aplicación de las reformas educativas; y crear capacidad institucional y humana en los planos nacional y de los estados. El Gobierno también está trabajando para mejorar las alianzas entre los principales interesados en la educación, incluidos los agentes de la sociedad civil.

183. Si bien hacer efectivos los objetivos ambiciosos del Gobierno para mejorar la educación requerirá tiempo y recursos, ya se han logrado éxitos provisionales mediante la aplicación de la Ley de Educación General de 2012 y los Documentos del Plan Estratégico de Educación General. Entre las medidas adoptadas cabe citar:

- a) El aumento del porcentaje de docentes calificados en todos los niveles mediante la capacitación y el desarrollo profesional continuo del personal docente;
- b) La revisión del plan de estudios de Sudán del Sur para la educación en la primera infancia, la escuela primaria, los sistemas de educación alternativa y la enseñanza secundaria;
- c) La adopción del inglés como idioma de instrucción;
- d) La implantación de un marco de Inspección Escolar Nacional;
- e) La evaluación sistemática de los resultados del aprendizaje;
- f) El seguimiento del gasto público mediante estudios que escudriñan el nivel de desviación de fondos y los recursos que llegan a los beneficiarios a diferentes niveles;
- g) El Gobierno ha introducido recientemente una nueva escala de sueldos. Además, con el apoyo de la Unión Europea, se prevé que los maestros de escuela primaria reciban incentivos mensuales por valor de 40 dólares durante 18 meses (2017-18);
- h) El Gobierno también está introduciendo un diseño estándar para la construcción de todas las clases que albergue a 50 niños de primaria y 45 niños de secundaria; e
- i) El Gobierno, en asociación con el Programa Mundial de Alimentos, ha introducido la alimentación escolar para los niños más necesitados.

184. Las cifras del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación de 2012 a 2016 muestran un aumento lento pero constante de la proporción de niñas que estudian en la escuela primaria y secundaria, aunque cabe señalar que las cifras del Sistema de 2015 y 2016 no reflejan la situación en todo el país. Según el informe del Sistema de 2016, la matriculación femenina varió significativamente por ubicaciones geográficas. En el antiguo estado de Lagos, alrededor de un tercio del alumnado eran niñas, mientras que en Amadi, en el antiguo estado de Ecuatoria Occidental, más de la mitad eran niñas (51 %).

Cuadro 6
El género en la educación



185. En 2013 el Gobierno promulgó legislación que prohibía los ataques y la ocupación de escuelas por los militares. Al respecto, el Gobierno emitió una circular a todos los comandantes del ejército de operaciones para que evacuaran todas las escuelas ocupadas por el ejército. La Dependencia de Protección de la Infancia de las FDPSS observa constantemente los movimientos de su personal y su asentamiento. Actualmente no hay información de que haya ninguna escuela que esté bajo ocupación del ejército.

La educación sobre derechos humanos y la educación cívica

186. El Plan de Estudios Nacional revisado en 2015 tiene un componente especial sobre la ciudadanía que se enseña en las escuelas secundarias. Incluye el estudio de los derechos humanos y el sistema de justicia penal, el sistema de gobernanza en Sudán del Sur y la resolución de conflictos.

El descanso, el juego, el esparcimiento y las actividades recreativas, culturales y artísticas

187. El artículo 16 de la Ley de la Infancia de 2008 dispone que todo niño tiene derecho a jugar y a participar en deportes o en actividades culturales y artísticas positivas u otras actividades de esparcimiento que fomenten el desarrollo del potencial del niño. El artículo 40 de la Constitución de Transición (enmendada) también establece que todos los niveles de la administración pública deberán:

- a) Aprobar políticas y proporcionar servicios para el bienestar de los niños y los jóvenes y velar por que se desarrollen moral y físicamente, y estén protegidos contra el abuso y el abandono morales y físicos;
- b) Promover las instalaciones recreativas y los deportes para todos los ciudadanos y empoderar a los jóvenes para que desarrollen sus potenciales; y
- c) Establecer, proteger y apoyar instituciones deportivas populares y garantizar su independencia. Existe un plan para reunir datos de todas las escuelas sobre las instalaciones y la participación de los niños en actividades extracurriculares y se ha diseñado un cuestionario a tal efecto. La práctica normal es que el estudiante participe en actividades deportivas, culturales y artísticas, pero esto no está documentado. Sudán del Sur es bueno en los deportes pero necesita organizarse mejor.

IX. Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) a d), y 38 a 40)

Los niños refugiados y los niños desplazados internos

188. El Gobierno tiene la firme determinación de cumplir las normas internacionales de protección de los refugiados. Se adhirió a la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África de 1969, a la Convención para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sudán del Sur es también parte en el Protocolo de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos sobre la Protección y la Asistencia a los Desplazados Internos (Protocolo de los Grandes Lagos).

189. En 2012 el Gobierno también aprobó una legislación nacional sobre los refugiados (Ley de Refugiados de Sudán del Sur de 2012) y estableció una Comisión de Asuntos de Refugiados para coordinar la respuesta de la administración pública a las cuestiones relativas a los refugiados y el asilo. La Ley de Refugiados incorpora la definición de refugiado establecida en la Convención de 1951 y en la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 y concede expresamente asilo a quienes tengan temores fundados de persecución por motivo de su raza, tribu, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. También concede expresamente asilo a quienes tengan temores fundados de persecución debido a prácticas discriminatorias por razón de género y garantiza el disfrute de los derechos establecidos en la Parte II de la Constitución (la Carta de Derechos); autoriza a los refugiados a buscar empleo; y proporciona acceso a los mismos servicios básicos de salud y educación primaria de que disfrutaban los nacionales de Sudán del Sur (artículos 7 y 33 de la Ley de Refugiados). En cuanto a los niños no acompañados, el artículo 36 de la Ley de Refugiados permite que los niños necesitados de cuidado, conforme a la definición de la Ley de la Infancia de 2008, reciban apoyo al solicitar asilo por conducto de un tutor *ad litem*, a fin de garantizar que se atienda a su interés superior.

190. El Acuerdo de Paz de agosto de 2015 y el Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario de 2017 comprometen al Gobierno a respetar lo siguiente:

- a) Garantizar el acceso a las poblaciones civiles que necesitan asistencia humanitaria de emergencia y protección;
- b) El derecho de los refugiados y los desplazados internos a regresar en condiciones de seguridad y dignidad y a recibir protección física, jurídica y psicológica;
- c) Los derechos de los retornados se respetarán de conformidad con la Carta de Derechos establecida en la Constitución de Transición (enmendada). Habida cuenta de ello, se hará lo posible por ayudar a la reunificación de los familiares que fueron separados durante el conflicto;
- d) El derecho de los refugiados y los desplazados internos a la ciudadanía y el establecimiento de mecanismos de registro e identificación o documentación adecuados de las poblaciones afectadas, incluidos sus hijos, cónyuges, bienes, tierras y otras posesiones que puedan haberse perdido durante el conflicto;
- e) El ejercicio del derecho de los refugiados y los desplazados internos a regresar a sus lugares de origen o a vivir en las zonas de su elección en condiciones de seguridad y dignidad; y
- f) También se ha comprometido a ofrecer una consideración especial a las personas afectadas por los conflictos (niños, huérfanos, mujeres, viudas, heridos de guerra, etc.) en la prestación de servicios públicos, incluido el acceso a los servicios de salud y educación, y a conceder a las comunidades de acogida las mismas prestaciones, protección y servicios humanitarios.

191. Sudán del Sur tiene una política de puertas abiertas a los refugiados. En marzo de 2018 acogía a más de 290.000 refugiados registrados de países vecinos. Los refugiados proceden principalmente del Sudán (más de 270.000), la República Democrática del Congo, Etiopía y la República Centroafricana. El 61 % de los refugiados son niños. La mayoría de los refugiados están asentados en campamentos en los antiguos estados del Alto Nilo y Unidad. La Comisión de Asuntos de Refugiados colabora estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones asociadas para prestar asistencia y protección a la población de refugiados, entre otras cosas mejorando las condiciones de vida de los refugiados en los campamentos; construyendo mejores alojamientos para las familias; garantizando los estándares en materia de atención de la salud, educación, agua e higiene y suministro de documentación, como certificados de refugiado y tarjetas de identidad. Las administraciones públicas en los planos nacional y de los estados también han proporcionado a los refugiados protección y tierras para el asentamiento y el cultivo. Los niños refugiados tienen acceso a la educación en los campamentos de refugiados y comparten algunas escuelas con los niños de la comunidad de acogida. La inscripción y la determinación oficial de la condición de refugiado se realizan en colaboración con el ACNUR.

192. Muchas personas han sido desplazadas internamente como consecuencia directa del conflicto y la inseguridad actuales, principalmente en los antiguos estados de Unidad, el Alto Nilo y Yonglei. Los desastres naturales también han causado el desplazamiento de poblaciones. Se calcula que hay 1,7 millones de desplazados internos en Sudán del Sur, de los cuales la mitad son niños no acompañados o separados de sus familias. Casi 2 millones de sursudaneses están refugiados en los países vecinos como consecuencia del conflicto.

193. También hay cerca de 200.000 desplazados internos en los emplazamientos de protección de civiles de la UNMISS en las ciudades de Malakal, Bor, Bentiu, Yuba y Wau. Son la máxima prioridad del Gobierno, que está facilitando a los desplazados internos que lo desean el reasentamiento en sus lugares de origen. El Gobierno también ha dispuesto que ningún desplazado interno será obligado a abandonar los emplazamientos de protección de civiles ni cualquier lugar en contra de su voluntad, que los desplazados internos que deseen establecerse de manera permanente en la comunidad en la que han sido acogidos serán autorizados a hacerlo y que, si hay disponibilidad, se les cederá una parcela de terreno para construir una vivienda. El Gobierno está solicitando a los asociados internacionales asistencia técnica y financiera a fin de crear la capacidad necesaria para recibir a los desplazados internos que se encuentran en los emplazamientos de protección de civiles de la UNMISS.

194. Para atender a los desplazamientos internos en sus diferentes dimensiones, el Gobierno ha creado el Comité de Socorro y Rehabilitación del Ministerio de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres. Ese Comité es responsable de prevenir los desplazamientos internos, ayudar y proteger a los desplazados internos y contribuir a soluciones duraderas. Ejerce esa responsabilidad de manera igualitaria y no discriminatoria, con independencia del origen étnico de la comunidad del desplazado interno. En estrecha colaboración con el ACNUR y otras organizaciones internacionales y nacionales, contribuye a la labor de identificación, localización de la familia y reunificación con ella de los niños separados y no acompañados; entre otras cosas, proporciona cuidado alternativo y apoyo y medios para prevenir la separación de la familia y establece redes de protección de la infancia basadas en la comunidad.

195. El Gobierno, en colaboración con el UNICEF, elaboró un procedimiento integrado que contribuye a proporcionar asesoramiento y apoyo psicosociales, un espacio adecuado para los niños en el que se facilitan, por ejemplo, materiales de dibujo, dispositivos de juego o material de lectura, y agua limpia y apta para el consumo e inmunizaciones; además, existe también un departamento de búsqueda y reunificación de familias dentro del Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social.

Grupos minoritarios

196. Sudán del Sur es uno de los países de mayor diversidad étnica y cultural del continente africano. El país tiene más de 65 idiomas y alrededor de 64 grupos étnicos, cada uno de los

cuales tiene sistemas únicos de estructura social, medios de vida, tradiciones culturales y sentido de la identidad. Se considera que esa diversidad es una fuente nacional de fortaleza que debe celebrarse, incluso aunque los conflictos hayan perturbado la vida de muchos niños de grupos minoritarios.

197. El artículo 33 de la Constitución de Transición (enmendada) se refiere a los derechos de las comunidades étnicas y culturales. Les garantiza el derecho a disfrutar y desarrollar libremente sus culturas particulares, a practicar sus creencias, a utilizar sus idiomas, a observar sus religiones y a criar a sus hijos dentro de sus culturas y costumbres respectivas. El artículo 6 de la Constitución de Transición (enmendada) pone de relieve que todas las lenguas indígenas de Sudán del Sur son idiomas nacionales y se respetarán, desarrollarán y promoverán, aunque el inglés es el idioma oficial de trabajo y el idioma de la educación. La Constitución también establece la separación de la religión y el Estado, prohíbe la discriminación religiosa y otorga a los grupos religiosos la libertad de culto y de reunión, de organizarse, de enseñar, de poseer bienes, de recibir contribuciones financieras, de comunicar y editar publicaciones sobre cuestiones religiosas, y de establecer instituciones de beneficencia.

198. Además de una disposición general sobre el derecho a la no discriminación en el artículo 9, la Ley de la Infancia de 2008 también contiene una disposición específica sobre los derechos de los niños cuyo origen sea de una minoría étnica, religiosa y cultural, en la que se explica que tienen derecho a disfrutar y desarrollar libremente su cultura y sus creencias, a utilizar su idioma y a observar su religión.

Los niños de la calle

199. El deterioro de la economía y el conflicto en curso han llevado a que los niños terminen sin el cuidado adecuado debido a la pobreza, la perturbación de las redes sociales, la separación de las familias y el desplazamiento de las comunidades. Se desconoce el número exacto de niños que viven y trabajan en las calles del país, pero hay pruebas claras y abrumadoras de su existencia principalmente en las zonas urbanas.

200. En una investigación realizada por la Universidad de Yuba en 2015 se determinó que la mayoría de los niños que carecían de cuidado adecuado en Yuba eran varones y tenían entre 10 y 14 años de edad y procedían de entornos de baja condición socioeconómica. El motivo por el que la mayoría de ellos terminaron sin el cuidado adecuado fue porque buscaban empleo, seguido de la pérdida de los padres, el maltrato infantil, las normas estrictas en el hogar, la comisión de un delito, las grandes familias polígamas, el matrimonio infantil y la disolución de matrimonios. Sobreviven mediante las ventas y el lustrado de zapatos, la recogida de basura o el lavado de coches; otros, mediante la mendicidad o el robo. Se enfrentan a muchos problemas como la deserción escolar, el abuso de drogas (sobre todo el esnifado de pegamento y otros compuestos similares) y la explotación sexual.

201. Tras la independencia, el Gobierno adoptó medidas para capacitar en la Universidad de Yuba a 176 trabajadores sociales de los diez antiguos estados en la detección, examen y respuesta en relación con los niños que carecen de cuidado adecuado. Se establecieron centros provisionales de orientación en las ciudades de Torit, Wau y Malakal, pero debido al conflicto y la falta de recursos, se cerraron. En 2013 y 2014, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social y los Ministerios de Género y Desarrollo Social de los estados realizaron un estudio sobre los niños que viven y trabajan en la calle en 6 de los 10 estados. Esos estudios formaban parte de una Iniciativa de Movilización Infantil destinada a proteger los derechos y el bienestar de los niños que viven y trabajan en las calles del país, que está orientada a sacar a esos niños de las calles, rehabilitarlos y reunirlos con sus familias. El objetivo es que en Sudán del Sur no haya niños que viven y trabajan en las calles. En los estudios se descubrió que la mayoría de los niños que viven y trabajan en la calle lo hacen contra su voluntad y experimentan muchas dificultades para las que necesitan diversas formas de asistencia; las necesidades más apremiantes de esos niños eran, por ejemplo, matricularse en escuelas y adquirir educación, encontrar un hogar en el que alojarse o conseguir ropa, capital para iniciar actividades generadoras de ingresos, empleo, capacitación para adquirir competencias profesionales, alimentos y atención médica.

Cuadro 7

Número de niños que viven y trabajan en la calle registrados por estado en 2013/14

	<i>Nombre del estado</i>	<i>Ciudad</i>	<i>Número de niños registrados</i>
1	Ecuatoria Central	Yuba	200 o más
2	Ecuatoria Oriental	Torit	180
3	Warrap	Kuayok	83
4	Bahr el-Ghazal Occidental	Wau	221
5	Unidad	Bentiu	60
6	Bahr el-Ghazal Septentrional	Aweil	114
	Total		858

Fuente: Iniciativa de Movilización Infantil, Estudio de la situación de los niños que viven y trabajan en las calles, Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social (2013/14).

202. Más recientemente, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social ha elaborado una Política Nacional sobre Protección y Cuidado de los Niños sin Atención Parental Adecuada. Cuando el Consejo de Ministros lo finalice, ese documento y los planes de acción que lo acompañan ayudarán a encarar sistemáticamente los problemas a los que se enfrentan los niños que viven y trabajan en las calles.

La explotación económica de niños, incluido el trabajo infantil

203. Según las cifras del censo de 2008, el 45,6 % de los niños de 10 a 14 años de edad trabajaba y, de ellos, el 60,2 % lo hacía en la agricultura y el 38,2 % en los servicios. La actividad económica era más común en los quintiles de hogares de rentas más bajas y en los hogares con un nivel de instrucción de los padres más bajo. Era ligeramente más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas. Entre el empleo rural que desempeñan los niños cabe señalar el trabajo en los campamentos ganaderos, así como el trabajo agrícola, por ejemplo cuando se los saca de la escuela para proteger las cosechas espantando las aves. En un estudio realizado en 2013 sobre los niños que carecían de cuidados apropiados en Yuba se determinó que el 87,8 % de ellos realizaba algún tipo de trabajo. Los varones se dedicaban principalmente a comerciar en los mercados o en la calle, a lustrar zapatos, a trabajar en los mataderos, a lavar coches y a realizar trabajos ocasionales. Algunas niñas trabajaban en los centros de mercado o como comerciantes ambulantes, haciendo té, cocinando comida o ayudando a las personas ciegas. Muchas niñas que viven en la calle han sido explotadas sexualmente. Los niños se enfrentaban a peligros relacionados con el trabajo, entre ellos los siguientes: el transporte de cargas pesadas; la manipulación de equipo peligroso; la exposición a polvo, humos, fuego, gas, llamas, ruidos fuertes o calor extremo; el trabajo en el agua; y el trabajo en ambientes oscuros y confinados. La mayoría de los niños padecían gritos constantes e insultos repetidos o, al parecer, sufrían golpes, heridas físicas, abusos sexuales o violaciones en los lugares de trabajo.

204. El reclutamiento obligatorio de niños menores de 18 años en las fuerzas armadas está clasificado como una de las peores formas de trabajo infantil. La Dependencia de Protección de la Infancia del ELPS desempeña una función fundamental en la prevención y la respuesta ante el reclutamiento de niños en el ejército y esto se examina más adelante.

205. El Gobierno ha adoptado varias medidas para proteger a los niños frente a la explotación económica y el trabajo infantil. En 2012 ratificó el Convenio de la OIT sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182). La edad mínima para trabajar se fija en 14 años en el artículo 25, párrafo 3, de la Ley de la Infancia y para “trabajos ligeros” se fija en 12 años en el artículo 25, párrafo 4. La edad mínima para realizar trabajos peligrosos se fija en 18 años en el artículo 25, párrafo 1. Las ocupaciones o actividades peligrosas prohibidas para los niños se

establecen en el artículo 25, párrafo 2. Además, la trata de niños está prohibida en virtud del artículo 22, párrafo 2 b).

206. El Ministerio de Trabajo, Función Pública y Desarrollo de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de elaborar políticas, hacer cumplir la legislación sobre el trabajo infantil, realizar inspecciones en los lugares de trabajo y supervisar los centros de formación profesional. Dentro de él, la Dependencia de Trabajo Infantil, integrada actualmente por seis investigadores, ha investigado casos de trabajo infantil. La Dependencia también encabeza un Comité Directivo Nacional sobre el Trabajo Infantil. El Marco de Políticas y Plan Estratégico del Ministerio (2012-2016) está a la espera de ser actualizado y tiene por objeto eliminar el trabajo infantil y apoyar las mejores prácticas en el lugar de trabajo. Se reconoce que, debido a los limitados recursos humanos y financieros y a la insuficiente capacitación, inspección y aplicación de la Ley contra el Trabajo Infantil, es necesario reforzar la Dependencia para que pueda realizar inspecciones en los lugares de trabajo e investigar los casos de trabajo infantil. Además, también se debe mejorar el cumplimiento de la legislación penal y la prevención.

La explotación y el abuso sexuales

207. La ley ofrece una serie de protecciones frente a la explotación y el abuso sexuales los niños:

a) El artículo 26 de la Ley de la Infancia de 2008 establece específicamente que toda niña tiene derecho a ser protegida frente al abuso y la explotación sexuales y la violencia de género, incluidos la violación, el incesto, el matrimonio precoz y forzado, la clitoridectomía y la mutilación genital femenina;

b) El artículo 22, párrafo 2, de la Ley de la Infancia de 2008 establece que todo niño tiene derecho a ser protegido frente a los siguientes tipos de trato y abuso mientras esté bajo la tutela de sus padres, tutores, profesores, la policía o cualquier otra persona que tenga a su cargo al niño: el abuso, la explotación y el acoso sexuales, incluidos, entre otros, aunque no exclusivamente, la violación, el incesto, la incitación o la coacción para que un niño sea testigo de una actividad sexual o se dedique a ella; la utilización de un niño en la prostitución u otras prácticas sexuales; y la utilización de un niño en espectáculos y materiales pornográficos;

c) En virtud del Código Penal de 2008, la edad mínima del consentimiento sexual para hombres y mujeres es de 18 años (artículo 247, párrafo 2) y existen disposiciones penales estándar que castigan los delitos relacionados con lesiones corporales, secuestro, rapto, violación, agresión y otros delitos sexuales;

d) En virtud del artículo 137 de la Ley de la Infancia los niños testigos y víctimas reciben protección cuando sea necesario, incluida la protección contra la intimidación.

208. No es fácil conseguir datos sobre la explotación sexual de los niños con fines comerciales, aunque queda entendido que los niños y las niñas sin atención adecuada son particularmente vulnerables. Se dispone de algunos datos sobre la prevalencia de la violencia sexual contra los niños en el país. En 2009, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) realizó una evaluación de la violencia de género en la que se constató que el 13 % de las mujeres había sufrido violencia sexual. Lamentablemente, muchas mujeres y niñas no hablan de esos incidentes por el temor al estigma social asociado a las personas que han sobrevivido a la violencia sexual. En Sudán del Sur sigue siendo muy difícil obtener información fidedigna debido a la cultura del silencio y a que la cuestión no se discute públicamente; la mayoría de las personas sobrevivientes no denuncian lo ocurrido a la policía ni buscan asistencia médica o de cualquier otro tipo.

209. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social es el principal encargado de la prevención, protección y respuesta en el plano nacional, mientras que en el plano de los estados el mandato corresponde a los Ministerios de Desarrollo Social de los estados. En este empeño, el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social colabora con otros ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio del Interior, así como con

organismos de las Naciones Unidas, asociados para el desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, a fin de combatir la explotación y el abuso sexuales de los niños. Un importante mecanismo de coordinación sobre esta cuestión es el subgrupo temático sobre la violencia de género, cuyo objetivo es aumentar la prevención y la respuesta ante la violencia de género y prestar apoyo al respecto, y tener en cuenta todos los tipos de violencia de género en sus actividades de coordinación, planificación y promoción. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social ha elaborado una Política Nacional de Género que trata explícitamente de la explotación y el abuso sexuales, y en 2014 elaboró procedimientos operativos estándar para combatir diversas formas de violencia de género, que el Gobierno hizo suyos. En la actualidad, el Hospital Universitario de Yuba presta servicios a las personas que sobreviven a la violencia sexual y de género y cuenta con un Centro de Gestión Clínica de la Violación.

210. Una iniciativa importante fue el establecimiento de Dependencias Especiales de Protección en las comisarías de policía en 2008, con el apoyo de ONU-Mujeres, el ACNUR, el PNUD y otros asociados para el desarrollo. Están concebidas para ofrecer un lugar donde las niñas y las mujeres puedan sentirse seguras al denunciar a la policía los delitos sexuales. Su personal está compuesto por agentes capacitados para investigar y llevar ante los tribunales los casos que afectan a mujeres y niños y garantizar la prestación de asistencia jurídica, protección, atención médica y apoyo psicosocial. Existen ya 14 Dependencias Especiales de Protección en las comisarías de todo el país, aunque principalmente en las zonas urbanas. Entre las dificultades cabe citar la frecuente redistribución de los agentes que han recibido una capacitación especializada y el uso del espacio de oficinas para otras tareas policiales. El Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social, en colaboración con los asociados internacionales para el desarrollo, está impartiendo formación a las Dependencias Especiales de Protección en el plano de los estados.

211. El PNUD ha impartido capacitación a la policía en el tratamiento de los casos de violencia sexual y de género, así como a abogados. La policía ha establecido también un departamento específico de mujeres policías. Un acontecimiento importante fue la publicación por el Inspector General de Policía de la Orden Administrativa 10, que aclara la política sobre el Formulario 8, un documento que muchos siguen considerando incorrectamente un requisito previo para que las personas que han sobrevivido a la violencia sexual tengan acceso a la atención médica. Todos los policías violan esa política si son sorprendidos cobrando una tarifa, ya sea para hacer una copia o para rellenar manualmente el formulario. En 2015 se impartieron al Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur las Directrices sobre los Derechos de la Mujer y el Niño, que tienen por objeto sensibilizar a todo el personal de policía sobre la manera de tratar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia de género. Se ha creado un Departamento de Justicia Juvenil y de la Mujer, dependiente de la Dirección de la Fiscalía, y el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales está adoptando medidas con objeto de evitar la trivialización de los casos de violencia sexual y de género en el sistema de justicia penal; entre otras, la elaboración de un manual sobre el modo de proceder en la investigación y enjuiciamiento de los casos de violencia sexual y de género.

212. En el plano informal, los niños afectados por la explotación y el abuso sexuales están protegidos por el sector local, que incluye la familia, el clan, la comunidad, las instituciones religiosas, los tribunales consuetudinarios o de aldea y los grupos de mujeres y jóvenes, que actúan principalmente proporcionando mediación y velando por que los niños permanezcan en la familia ampliada. Los niños no participan en esos grupos debido a las barreras culturales.

213. En 2013 el Gobierno llevó a cabo un estudio de referencia en el que se examinaban las repercusiones de los conflictos en las niñas y las mujeres, a fin de fundamentar la preparación de un plan de acción encaminado a aumentar la paz y la seguridad para las mujeres y las niñas de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con respecto a la violencia sexual, el estudio determinó que solo existen datos limitados sobre la escala del problema y su posible relación con los conflictos. Por lo tanto, se necesitan investigaciones rigurosas y sensibles para establecer la causa fundamental de la violencia sexual y de género y mejorar las respuestas. De resultados del estudio de referencia relacionado con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas, se elaboró un plan de acción nacional para responder a las necesidades de las personas que han sobrevivido a la violencia sexual en los conflictos armados: el Plan de Acción Nacional de Sudán del Sur 2015-2020 sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la Mujer, la Paz y la Seguridad y las Resoluciones Conexas. El Plan de Acción se puso en marcha en 2016 y se está aplicando. Entre los objetivos de ese detallado Plan de Acción Nacional cabe citar los siguientes: proporcionar protección a las mujeres y las niñas, incluidas las que tienen discapacidad, contra toda forma de violencia sexual y de género y restablecer el respeto de los derechos humanos, la dignidad humana y la igualdad en el país.

214. Además de la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno ha adoptado las medidas concretas siguientes para prevenir y combatir la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos. En 2014 firmó un comunicado conjunto con la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. Ese acuerdo incluye medidas como la publicación y el cumplimiento de órdenes claras a través de las cadenas de mando militares y policiales, la prohibición de la violencia sexual, mecanismos de rendición de cuentas, la expulsión de las fuerzas de seguridad de los autores de los delitos y su exclusión de las disposiciones sobre amnistía, y la mejora de los servicios multisectoriales para las personas supervivientes. Para ponerlo en práctica, se estableció un Grupo de Trabajo Técnico Conjunto sobre la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos, dependiente de la Oficina del Presidente, que incluye a ministerios conexas y organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el UNICEF, la UNMISS, ONU-Mujeres, el PNUD y el UNFPA

215. Como parte del Acuerdo de Paz firmado en agosto de 2015, las partes beligerantes se comprometieron a abstenerse de actos y formas de violencia sexual y de género, incluidos la explotación y el acoso sexuales. El ELPS también tiene su propio Código de Conducta en relación con la violencia sexual y de género.

La venta, la trata y el secuestro de niños

216. Los niños de Sudán del Sur, en particular los que carecen de cuidado adecuado, incluidos los desplazados internos no acompañados, son vulnerables a la trata con fines de explotación (entre otras cosas, para el trabajo sexual o la utilización como mano de obra), en particular mediante el uso del secuestro. Aunque hay pruebas de trata interna y transfronteriza, no se ha calculado el número exacto de niños que la han sufrido. Sudán del Sur es también un país de destino y tránsito para los niños objeto de trata procedentes de otros países.

217. Sudán del Sur no ha ratificado aún el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, de 2000. Sin embargo, el Gobierno y sus asociados han instituido una serie de medidas jurídicas, de políticas y administrativas para luchar contra la trata de niños:

a) El capítulo VIII de la Ley de la Infancia se refiere a la trata y el secuestro de niños y prescribe penas de hasta diez años de prisión para esos delitos;

b) El Código Penal de 2008 prohíbe algunas formas de trata y secuestro: los artículos 278 y 279 prohíben el secuestro y el traslado del control sobre una persona con fines de trabajo obligatorio ilegal y prescriben penas de hasta 7 años de prisión. El artículo 276 tipifica como delito la compra o venta de niños con fines de prostitución y prescribe una pena de hasta 14 años de prisión. El artículo 258 prescribe penas de hasta 10 años de prisión para los padres o tutores que hagan que sus hijos participen en el comercio sexual o lo permitan;

c) En diciembre de 2015, el Gobierno designó al Comité Nacional de Extranjería como mecanismo de coordinación nacional en materia de migración encargado de las cuestiones relacionadas con la trata en el país;

d) La Ley del Servicio de Policía de 2009 designa al Servicio de Policía como principal encargado de investigar los posibles delitos de trata y hacer cumplir la legislación al respecto;

e) El Gobierno tiene memorandos de entendimiento con Kenya, Rwanda, Etiopía y Uganda para facilitar los intercambios de información, entre otras cosas sobre la trata de personas; y

f) Hay centros infantiles que prestan apoyo institucional directo a los niños vulnerables, incluidas las víctimas de la trata, como la ONG Confident Children out of Conflict, con sede en Yuba.

218. Se necesita una solución a largo plazo para el problema de la trata de niños que tenga en cuenta la forma en que se fortalecen las condiciones socioeconómicas y políticas de cada niño, su familia y la comunidad en que vive, de modo que los problemas de la trata de niños puedan enfrentarse simultáneamente del lado de la demanda y del de la oferta.

Los niños en conflicto con la ley y los niños víctimas y testigos de delitos

219. El capítulo X de la Ley de la Infancia garantiza la protección de los niños en conflicto con la ley de conformidad con las normas internacionales. En él se prevé el establecimiento de un sistema especializado de justicia juvenil, medidas de derivación, alternativas a la privación de libertad y el fomento de los vínculos con los sistemas de bienestar social. Los objetivos primordiales del sistema de justicia juvenil que figuran en el artículo 135 de la Ley de la Infancia son la reforma, la rehabilitación social y la reintegración del niño, poniendo de relieve al mismo tiempo la rendición de cuentas individual por los delitos cometidos y el restablecimiento de relaciones armoniosas entre el niño infractor y la víctima mediante la reconciliación, la restitución y la indemnización.

220. El artículo 30 del Código Penal de Sudán del Sur de 2008 dispone que se considerará que un niño menor de 12 años carece de capacidad penal y no será juzgado ni condenado por ningún delito que presuntamente haya cometido. El artículo 31 dispone que no se presumirá de ninguna persona mayor de 14 años que carece de la capacidad de concebir la intención necesaria para cometer un delito o, cuando la negligencia sea un elemento del delito, que carece de la capacidad de comportarse de la manera en que se habría comportado en las circunstancias un adulto razonable.

221. El artículo 149 de la Ley de la Infancia de 2008 establece que la prisión preventiva solo tendrá lugar en circunstancias excepcionales, para los casos más graves, como medida de último recurso y durante el período más breve posible; que la pena impuesta será no privativa de libertad cuando sea posible; y que la pena impuesta a un niño será razonable y proporcionada a las circunstancias y la gravedad del delito, así como a las circunstancias y necesidades del niño. El artículo 11 de la Ley del Código Penal de Sudán del Sur de 2008 especifica que los niños pueden ser condenados a internarse en reformatorios por un período de entre 2 y 5 años.

222. En la práctica, hay muchas dificultades para aplicar el capítulo X de la Ley de la Infancia. Falta personal especializado como jueces y trabajadores sociales. Actualmente quienes prestan asistencia jurídica son la sociedad civil, asistentes jurídicos y bufetes de abogados, de manera bastante *ad hoc*. Con demasiada frecuencia los niños permanecen más tiempo del necesario en detención en celdas de la policía y en prisión preventiva junto con adultos. A menudo, quienes se ocuparán de los niños en conflicto con la ley serán los tribunales consuetudinarios que se reconocen en la Constitución de Transición (enmendada), la Ley de la Administración Local de 2009 y la Ley de la Infancia de 2008, que establece que nada en ella impedirá, desalentará o prohibirá la aplicación de las leyes consuetudinarias y tradicionales que protegen los derechos del niño, excepto cuando esas leyes sean contrarias al interés superior del niño.

223. En 2012 el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social elaboró un Marco Estratégico sobre la Justicia para los Niños (2012) que promueve la derivación, así como alternativas a la prisión preventiva para los niños infractores en el plano de los condados, de conformidad con la Ley de la Infancia. En 2013 se elaboró una estrategia adicional para impulsar la derivación y la justicia restaurativa, que se ha ensayado en Malakal y Wau, pero debido a la perturbación del conflicto todavía no se ha aplicado plenamente. Se han hecho

algunos progresos más concretos en Rumbek, en el antiguo estado de Lagos, donde se estableció en 2015 un tribunal especializado para los niños con el apoyo de Save the Children, aunque actualmente no está en funcionamiento. Desde 2015, el Ministerio de Desarrollo Social del estado de Bahr el-Ghazal Occidental ha venido participando en un programa de derivación en pequeña escala concebido para aprovechar las virtudes de las tradiciones consuetudinarias de justicia restaurativa. Se pretende que ese modelo se extienda a zonas menos afectadas por el conflicto; se basa en una investigación y consulta amplias realizadas por el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social con el apoyo del UNICEF.

224. Después de la firma del Acuerdo General de Paz en 2005, los niños privados de libertad fueron internados en la Prisión Central de Yuba y, aunque se les separaba de los presos adultos durante la noche, no se les separaba durante el día. Para responder ante esa situación, el Gobierno, con el apoyo de asociados internacionales, construyó un centro de detención especializado para niños varones en Wau, en el que los niños internados tendrían acceso a una formación agrícola. En 2017 se abrió el primer centro de detención para niñas en Wau con el apoyo de la UNMISS. Ese edificio también incluye instalaciones de tribunales y las niñas pueden acceder allí a servicios de salud y educación.

225. A pesar de esas nuevas instalaciones, los niños siguen siendo reclusos en prisiones para adultos en los estados. En la prisión situada en Torit, por ejemplo, había 25 niños varones privados de libertad en abril de 2018. Aunque la administración penitenciaria es plenamente consciente de la necesidad de mantener a los niños separados de los reclusos adultos, algunos niños siguen encarcelados junto con los adultos debido principalmente a la falta de recursos. Cuando esto ocurre, se hace todo lo posible para mantener a los niños en edificios y celdas separados. Faltan programas de rehabilitación y reintegración para los niños reclusos y entre las dificultades cabe citar un alto nivel de analfabetismo entre los empleados de las prisiones y la no imposición de servicios comunitarios y libertad condicional.

Cuadro 8

Número total de jóvenes infractores en prisiones y reformatorios de Sudán del Sur en octubre de 2017

<i>Condenados</i>		<i>En detención preventiva</i>		<i>Total</i>
<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	
187	10	121	7	325

Fuente: Servicio Penitenciario, octubre de 2017.

Cuadro 9

Número de jóvenes infractores en el reformatorio de Wau en octubre de 2017

<i>Condenados</i>		<i>En detención preventiva</i>		<i>Total</i>
<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	
51	2	41	4	98

Fuente: Servicio Penitenciario, octubre de 2017.

226. La Ley de la Infancia se refiere explícitamente a los niños testigos de delitos en el artículo 137, que establece que los niños testigos y víctimas recibirán protección cuando sea necesario, incluida protección contra la intimidación. Todavía se necesitan medidas adicionales para aplicar esa disposición.

Los niños en los conflictos armados

227. Sudán del Sur se ha visto afectado por conflictos armados durante muchos decenios; los más recientes fueron los producidos desde el estallido de hostilidades en 2013 y nuevamente en 2016. La vida de los niños se ha visto gravemente afectada por crecer en ese contexto debido al aumento de la migración transfronteriza y los desplazamientos internos, la separación de las familias, las dificultades para acceder a los servicios de educación, salud

y protección, la perturbación de la agricultura que ha causado pobreza y malnutrición y, en algunos casos, la exposición a la violencia, incluida la violencia sexual y de género. Además, algunos niños han sido reclutados y utilizados como soldados por diferentes partes. La presente sección se centra principalmente en el reclutamiento y la utilización de niños soldados, ya que otras cuestiones que afectan a los niños en los conflictos armados se examinan en otras partes del informe.

228. El Gobierno está firmemente decidido a eliminar el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Sudán del Sur es un Estado parte en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 desde 2013, además de haber ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Además, el Gobierno ha hecho suyos los Principios y Directrices sobre los Niños Asociados a Fuerzas o Grupos Armados (Principios de París) de 2007, así como la Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015.

229. El artículo 17, párrafos 1 d) y 4, de la Constitución de Transición (enmendada) de 2011 especifica que no se exigirá a los niños que sirvan en el ejército y que se entiende por niño toda persona menor de 18 años. El artículo 31 de la Ley de la Infancia de 2008 especifica que la edad mínima para el alistamiento o el reclutamiento en las fuerzas armadas es de 18 años y que no se utilizará a los niños en ninguna actividad militar ni paramilitar en contravención de la ley. Esa Ley también establece explícitamente penas por el reclutamiento o la utilización de un niño en una fuerza armada consistentes en prisión por un período no superior a diez años o multa o ambas. En virtud de la Ley del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán de 2009, una persona debe tener 18 años o más para poder alistarse.

230. De conformidad con el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, firmado por el ELPS y el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (ELPS-O) en 2015, ambas partes se comprometieron a la desmovilización inmediata e incondicional de los niños soldados bajo su mando o influencia, que sería llevada a cabo por el UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

231. Se han adoptado medidas para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados desde 1995, cuando el ELPS colaboró por primera vez con el UNICEF y Save the Children para formar un grupo de trabajo de detección en Rumbek, que desmovilizó a unos 3.000 niños. De resultados de la firma del Acuerdo General de Paz en 2005, la cuestión siguió siendo una de las prioridades de los dirigentes del ELPS. El 20 de noviembre de 2009 el ELPS se comprometió con las Naciones Unidas a aplicar un Plan de Acción para Poner Fin al Reclutamiento y la Utilización de Niños como Soldados que incluye la desmovilización de todos los niños asociados con las fuerzas de seguridad gubernamentales; la prestación de servicios para la reunificación y la reintegración con su familia; la investigación de las violaciones graves contra los niños y la rendición de cuentas de los autores de los delitos. El Gobierno también se ha comprometido a poner fin a todas las violaciones graves contra los niños.

232. A fin de poner en práctica ese Plan de Acción de 2009, se adoptaron las medidas siguientes:

a) Se estableció una Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración de conformidad con el artículo 149 de la Constitución de Transición (enmendada). Uno de sus objetivos es desmovilizar a todas las personas menores de 18 años de las fuerzas armadas y contribuir a que logren reintegrarse a la vida civil;

b) En 2009, con el apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo, se estableció dentro del Ministerio de Defensa y Asuntos de los Veteranos un Departamento de Protección de la Infancia de las FDPSS. Ese Departamento coordina la aplicación del Plan de Acción y desempeña diferentes funciones, entre ellas la de concienciar a la población; por ejemplo, en 2010, 1.043 oficiales de protección infantil de toda la organización, incluidas todas las divisiones del ELPS, recibieron formación para ser coordinadores al respecto. El Departamento también contribuye a facilitar el acceso del personal de las Naciones Unidas, el UNICEF y la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración para que pueda vigilar, denunciar, verificar y registrar cualquier reclutamiento de niños por parte del

ejército. En 2013 presentó a la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados un informe conjunto sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción.

233. A pesar de esos logros, en 2010 y 2011 la aplicación del Plan de Acción de 2009 se vio perturbada por la inseguridad causada por la violencia en torno a las elecciones y la falta de recursos técnicos y financieros. Por ello, en 2012 el Gobierno, las Naciones Unidas y el UNICEF firmaron un Plan de Acción Revisado en el que se prestaba una mayor atención a la rendición de cuentas. Como consecuencia, tan solo en 2013, 821 niños y niñas fueron desmovilizados del ejército nacional, y otros 540 de grupos de milicias que operaban en el país.

234. El 14 de agosto de 2013 las FDPSS emitieron una Orden Punitiva General en la que se recalca la prohibición del reclutamiento y la utilización de niños soldados y se ordenaba la adopción de medidas administrativas si se demostraba que se había violado esa norma. En 2014 el Ministerio de Defensa y Asuntos de los Veteranos firmó un Acuerdo de Nuevo Compromiso con las Naciones Unidas para continuar con las actividades destinadas a poner fin a las graves violaciones de los derechos de los niños. Las Naciones Unidas y las FDPSS también pusieron en marcha la campaña “Niños, No Soldados” para concienciar contra la utilización de niños en las fuerzas armadas y grupos armados. El 26 de mayo de 2015 el Gobierno emitió una orden ministerial en la que recordaba a todos los miembros del ELPS que se abstuvieran de realizar ataques deliberados contra civiles, de violar y de cometer actos de violencia sexual, así como de utilizar a niños soldados, y ordenaba la remisión de todas las violaciones de los derechos del niño a la justicia militar para su enjuiciamiento.

235. En 2015, 1.755 niños fueron separados de la facción Cobra del Movimiento Democrático de Sudán del Sur en la Zona Administrativa de Pibor y 2 niños que habían sido separados del ELPS-O fueron confiados a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración para su reintegración. En 2016 las FDPSS y la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración desmovilizaron a 25 niños del ELPS en Bentiu y a 145 niños de la facción Cobra en Pibor. Con el apoyo del UNICEF, todos los niños desmovilizados se han acogido o siguen acogándose a los servicios de reintegración (junto con otros niños vulnerables en sus comunidades de retorno), que incluyen la localización de las familias y la reunificación con ellas, el apoyo psicosocial, la educación, la formación profesional y las oportunidades de subsistencia. El 7 de febrero de 2018, 311 niños soldados fueron desmovilizados de dos grupos armados de Yambio, en Gbudue (en el antiguo estado de Ecuatoria Occidental); además, fueron desmovilizados 216 niños del Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur y 96 niños soldados del ELPS-O. De los niños soldados desmovilizados, 224 eran varones y 87 niñas. En abril de 2018, 112 varones y 95 niñas, algunos de tan solo 14 años, fueron desmovilizados en Yambio de dos grupos armados: el Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur y el ELPS-O.

236. Las medidas que está aplicando el Gobierno para transformar el ejército en una fuerza profesional se han topado con diversas dificultades, como la aparición de conflictos internos, los criterios deficientes de reclutamiento y una falta de capacitación, recursos financieros y conocimientos sobre la protección infantil. Todo esto ha afectado a la capacidad de las FDPSS de enfrentarse por completo al reclutamiento y la utilización de niños soldados. Lo que se necesita además son recursos técnicos y financieros y un mejor equipo de comunicaciones y transporte para que la Dependencia de Protección de la Infancia de las FDPSS pueda desempeñar sus tareas.